

r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu
n tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuado
s de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tie
e cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempo
o Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de ca
r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu
n tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuado
s de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tie
e cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempo
o Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de ca
r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu

AMERICA LATINA

en movimiento

423



agosto 2007

n tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuado
s de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tie
e cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempo
o Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de ca
r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu
n tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuado
s de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tie
e cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempo
o Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de ca
r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu
n tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuado
s de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tie
e cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempo
o Ecuador en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de ca
r en tiempos de cambio Ecuador en tiempos de cambio Ecu

Ecuador en tiempos de cambio

alain

AMERICA LATINA *en movimiento*

20 agosto 2007 **423**
año XXXI, II época

**Publicación internacional
de la Agencia Latinoamericana
de Información**

ISSN No. 1390-1230
Registro SENACOM No. S.P.I. 437

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal
Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador
Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,
Of. 503, Quito-Ecuador

Telf: (593-2) 2528716 - 2505074
Fax: (593-2) 2505073
Redacción: info@alainet.org
Suscripciones:
alaiadmin@alainet.org
Publicidad: alaiadmin@alainet.org
URL: <http://alainet.org>

ALAI es una agencia informativa, sin fines de lucro, constituida en 1976 en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta publicación pueden ser reproducidas a condición de que se mencione debidamente la fuente y se haga llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son de estricta responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de ALAI.

Suscripción (12 números anuales)

	Individual	Institucional
A. Latina	US\$ 40	US\$ 60
Otros países	US\$ 55	US\$ 100

Cómo suscribirse:

www.alainet.org/revista.phtml

Artes Gráficas SILVA 2551-236

Foto de portada:
Patricio Realpe

Diseño de portada:
Verónica León

- 1 ¿Incertidumbres a las puertas del cambio en Ecuador?
Mario Unda
- 4 Una perpetua encrucijada
Julián Quito
- 9 La política del gatopardo
Pablo Dávalos
- 12 Realineamiento internacional
Roger Burbach
- 15 Momento de quiebre
Entrevista a Milton Benítez
Osvaldo León
- 18 Conflictos sociales y medio ambiente
Esperanza Martínez
- 21 El movimiento indígena y el actual proceso de transición
Floresmilo Simbaña
- 24 Los derechos humanos en el gobierno de Correa
Paulina Ponce
- 27 Movimiento de mujeres y Asamblea Constituyente
M^a. del Pilar Troya F.
- 30 Revolución ciudadana: Con los medios en contra
Eduardo Tamayo G.

¿Incertidumbres a las puertas del cambio en Ecuador?

Mario Unda

Hoy en América Latina existe una disputa en torno al futuro de "la larga noche neoliberal"; y si bien el gobierno ecuatoriano no es el de Bolivia ni el de Venezuela, de todos modos sus perspectivas y posibilidades sólo pueden comprenderse dentro de este marco de luchas y de articulación de fuerzas.

Las vicisitudes de la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición

El triunfo de Rafael Correa en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2006 significó un viraje marcado en la relación de fuerzas, que ha presentado desde entonces, y con cierta claridad, dos momentos.

Un primer momento se caracteriza por la ofensiva del gobierno: los grupos dominantes y sus partidos políticos sufrieron una fuerte derrota, que se profundizó en la consulta popular del 15 de abril, cuando el pueblo aprobó el llamamiento a una Asamblea Constituyente. Pero a partir de entonces, se abre *un segundo momento*, caracterizado, en cambio, por la ofensiva cerrada de la derecha y de los gremios empresariales, procurando revertir la tendencia y recuperar terreno. Estamos en tránsito: el 30 de septiembre, en los comicios para elegir la Asamblea Constituyente, se abrirá un tercer momento que, en buena parte, determinará los acontecimientos posteriores.

Hasta ahora, las vicisitudes de la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición de derechas ha sobredeterminado el campo de la conflictividad social y política, obscureciendo los contornos del accionar de los movimientos sociales; esto, a pesar de que, al mismo tiempo, en este segundo momento han comenzado a evidenciarse desencuentros entre el régimen y la movilización popular.

El conflicto y los actores del conflicto

Mirado desde los actores, el conflicto se desdobra, desenvolviéndose en tres ámbitos. *El conflicto con los actores políticos* fue el primero en desatarse. Correa se había abstenido de presentar candidatos al Congreso, lo que le permitió subir la intención de voto en la campaña electoral, pero lo dejaba en precarias condiciones de gobernabilidad. La oposición coaligó al Partido Social Cristiano (PSC), a la Unión Demócrata Cristiana (UDC), al Partido Sociedad Patriótica (PSP) y al Partido Renovador Independiente de Acción Nacional (PRIAN): el núcleo de la tradicional "partidocracia" y los recientes populismos. Unos y otros fueron golpeados por el voto popular en la primera y, sobre todo, en la segunda vuelta electoral. La crisis institucional de la democracia representativa y de sus instrumentos se asoció fuertemente en la conciencia social con estos partidos. Su caída significa el fin de un período iniciado en 1978 con el llamado "retorno a la democracia". Una oposición intransigente al gobierno aparece como vía para reagrupar las fuerzas dispersas y derrotadas, para reenlazar su control ideológico sobre sectores de la población, y para dirimir la pugna interna por la hegemonía de la derecha.

Pero sus cálculos no tienen que ver solamente con la aritmética electoral. Se trata de partidos directamente vinculados a los grandes grupos empresariales (el PRIAN y el PSC sobre todo en la Costa; la UDC, en la Sierra); su afán opositor deviene, sobre todo, de las inquietudes de los grupos dominantes.

En procura de recuperar los espacios perdidos y de recomponerse, estos partidos se lanzaron a la oposición. Lo han hecho, sobre todo, desde el Parlamento, que controlaban, y desde las instituciones estatales cuya conformación depende

del Congreso: Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC)... Su intención de maniatar y desgastar al gobierno se hizo patente en la discusión sobre el llamado a consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente: le dieron largas al asunto, y todo apuntaba a que lograrían vencer la pulseada. Envalentonados, cometieron un error: "sustituyeron" al presidente del TSE cuando éste votó a favor de la realización de la consulta -pero no tenían facultad legal para hacerlo-. En respuesta, una nueva mayoría en el TSE destituyó a medio centenar de legisladores, acusándolos de obstruir el proceso electoral -y estaba legalmente facultada para hacerlo-.

No obstante, el triunfo del gobierno resultó efímero. La nueva mayoría, constituida con los diputados suplentes de aquellos que fueron destituidos por el TSE, volvió al redil opositor apenas se trataron dos propuestas sensibles para los grupos dominantes: la provincialización de Santa Elena (que hubiera restado base electoral al PSC y al PRIAN) y la rebaja de los intereses cobrados por el sistema financiero (resistida abiertamente por la banca). Ese fue el momento, además, para comprobar que las formaciones políticas socialdemócratas se encuentran mucho más cerca de los intereses de los grupos dominantes que de una propuesta reformista: la Izquierda Democrática (ID) y la RED (Red Ética y Democrática) sumaron sus votos a la banca y asumieron el discurso belicoso de los partidos que se adelantaron a ellas en el rumbo opositor, llegando a anunciar incluso un juicio político al presidente.

El gobierno, nuevamente enfrentado al parlamento, volvió a proponer que la Asamblea Constituyente destituya al Congreso.

El conflicto con los empresarios está en el trasfondo de las maniobras políticas. Los empresarios acabaron colgándose al programa neoliberal a mediados de la década de 1980, luego de que las primeras "medidas de ajuste estructural" fueran impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a través del Estado nacional. Desde entonces han sostenido su continuidad con verdadero fundamentalismo. Así como iba evidenciándose el desfundamiento de las intermediacio-

nes políticas, los gremios empresariales -y los empresarios mismos- fueron apersonándose de la defensa pública del programa neoliberal: las diversas tretas de la flexibilidad laboral, la contención de los salarios, la liberación de controles para el capital, la firma del TLC con Estados Unidos, etc.,... y sus anexos políticos (como la entrega de la base de Manta).

En un primer momento asumieron un aire de "buenos consejeros"; pero apenas se hizo evidente que las políticas gubernamentales no iban en el sentido de la continuidad neoliberal, enfilaron sus armas. El proyecto de provincialización de Santa Elena fue la ocasión para refrendar la unión político-gremial de las clases dominantes. El proyecto sobre los intereses y comisiones de la banca fue tomado como una declaración de guerra. Apariciones públicas, espacios en los noticieros de la televisión, remitidos de prensa, rumores, incremento de precios, cabildeos dirigidos hacia los congresistas: su repertorio de acciones ha sido diverso, aunque poco original. La banca y, en general, los gremios empresariales se vistieron de oposición política y dejaron en claro que ninguna reforma sería tolerada.

El conflicto con los medios de comunicación es apenas una secuencia de los anteriores, pero quiere ser presentado como un conflicto "no político". Todo sea dicho, la actitud irreflexiva del gobierno (y del propio presidente), emitiendo declaraciones fuera de tono, han sido la excusa perfecta para la ofensiva de los grandes medios de comunicación. Basta echar una somera mirada a los editoriales de los periódicos más vendidos, y escuchar por encima los espacios editoriales de los noticieros de televisión para comprobar cómo, ante el desfundamiento de los partidos y de las instituciones propiamente políticas, los gremios empresariales y los medios de comunicación han asumido abiertamente el rol del partido de oposición, amplificando escándalos y cargando las tintas en interpretaciones interesadas.

Las incertidumbres de los movimientos sociales

El gobierno se encuentra enfrentado a los grupos de poder. Sin embargo, esto no se ha tra-

ducido en una alianza político-social con los movimientos sociales que, desde hace dos décadas, resisten la implementación y la profundización del modelo neoliberal.

El gobierno pudo haber aprovechado la ejecución de sus políticas sociales para acercar a los movimientos a su propuesta y, de paso, fortalecerlos; no quiso dar el paso. Pudo haber aprovechado sus pugnas con los grupos dominantes para concitar la movilización masiva de los movimientos y hacer retroceder a los dueños del poder y del dinero; tampoco quiso hacerlo. Pudo, finalmente, haber aprovechado la próxima elección para la Asamblea Constituyente como un mecanismo para crear y fortalecer un amplio espacio de encuentro entre todas las fuerzas políticas y sociales que apuntan al cambio; no dio ese paso. Las únicas alianzas que ha concertado son con grupos menores, de escasa representación y relevancia nacionales.

En estas circunstancias, la apuesta del gobierno se dibuja con cierta claridad: enfrentado a los grupos de poder y a los partidos que los representan, debe armarse de una base social que le permita una relativa sustentación. Pero quiere una base propia; desde esta perspectiva, los movimientos sociales son vistos como una competencia indeseable -y más indeseable mientras mayor fuerza organizada posean y más aspiren a mantener la independencia política. El gobierno disputa la base social no únicamente a los partidos populistas y a la derecha, sino a los movimientos sociales y a las izquierdas.

Por otro lado, prendido a su discurso *ciudadanista*, no parece muy cómodo ante espacios organizados con cierta representatividad social. Finalmente, el discurso de la ciudadanía actúa también con la inútil pretensión de acabar disolviendo las líneas más claras de las confrontaciones de clase.

Enfrentados a esta situación, la actuación de los movimientos no ha sido tampoco muy lúcida. Mientras las bases de las organizaciones adoptan en general una cauta actitud de espera, sus dirigencias oscilan entre el seguidismo al gobierno y la autocooptación, por un lado, y, por otro, discursos de oposición radi-

cal que, en ciertos momentos, no pueden distinguirse con suficiente claridad de la oposición de la derecha, de los gremios empresariales y de sus voceros mediáticos.

Ante la evidencia de que el gobierno no estaba interesado en la creación de un espacio de encuentro político y social para el cambio, **los movimientos sociales y las izquierdas se dejaron ganar por una dinámica de dispersión y fragmentación, alimentada por ambiciones y vanidades.** El resultado es que en las elecciones para la Constituyente tenemos el cuadro de mayor dispersión del campo popular en todas estas casi tres décadas desde el "retorno".

Las perspectivas, entonces, se han vuelto inciertas. Una primera instancia para dirimirla serán las elecciones de fines de septiembre. La correlación de fuerzas resultante dará las pautas para lo que vendrá.

Pero, mientras tanto, comienza a perfilarse un eje de conflictividad más allá de las coyunturas gubernamentales y en donde, por el momento, parece perfilarse la posibilidad de una movilización popular independiente: los recursos naturales, el agua y la tierra. En el centro, las extracciones mineras: en los últimos años, se han otorgado concesiones en amplias extensiones territoriales, sobre todo en la Sierra, en tierras donde se encuentran asentadas comunidades indígenas y poblados, o en sus proximidades.

Las movilizaciones buscan que se anulen las concesiones y defender la tierra y el agua. Pero se trata también de una defensa de las comunidades: las compañías mineras, para obtener las concesiones, provocan diferenciaciones y divisiones en las comunidades, procurando que un sector apoye la explotación minera a cambio de unas pocas mejoras o de beneficios personales. Las movilizaciones campesinas e indígenas han sido firmes y, frente a ellas, el gobierno ha optado por hacer causa común con las compañías, produciéndose fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas represivas. Acá el régimen ha dejado de lado sus definiciones contrarias al modelo neoliberal y de afirmación de la soberanía para escudarse en una retórica productivista del desarrollo.

De esta manera, en el conflicto que enfrenta a las compañías mineras transnacionales con las comunidades campesinas e indígenas se revelan de manera clara los límites del gobierno. Pero también se vuelven patentes las limitaciones del movimiento popular que, en general, ha dejado solos a quienes resisten la violencia del capital transnacional.

Pero estas conclusiones aparecen aún oscurecidas en la conciencia social, opacadas por la expresión política del conflicto entre el gobierno y la derecha.

Un juego de conflictividades a tres bandas

En síntesis, va perfilándose un juego de conflictividades a tres bandas: por un lado, un gobierno más o menos nacionalista y desarrollista, que refleja una alianza entre capas politizadas de clases medias que han resentido la hegemonía oligárquica y sectores empresariales más o menos alejados del modelo neoliberal; por otro lado, los grupos empresariales y de derecha que mantuvieron el control del Estado durante estos 30 años de "democracia".

El conflicto entre ellos copa la parte visible del escenario y casi toda la atención de la conciencia social; en parte es así por las dinámicas reales de lo que ahora está en juego, pero en parte es una apariencia generada por los propios actores interesados en crear una polarización que excluya otros actores y otras posibilidades.

Aún así, persiste, aunque debilitada, fragmentada y tensionada por el conflicto entre el gobierno y la oposición empresarial, una movilización popular independiente que trata de mantenerse y de reconstituirse. Por desgracia, difícilmente logrará tener una expresión significativa en la próxima Asamblea Constituyente: las izquierdas desertaron de la tarea de construir un campo político para el encuentro autónomo de las luchas sociales. Y es eso lo que habrá que enfrentar en adelante, sea cual sea el resultado electoral del 30 de septiembre. ◀

Mario Unda, sociólogo ecuatoriano, es catedrático universitario.

Paradoja de las paradojas: a menos de cuatro meses del contundente triunfo electoral del 15 de abril del presente año -en el que el SI a la convocatoria de Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno obtuvo el 82% de los votos- y del derrumbe del régimen político vigente -la llamada "partidocracia"-, el gobierno ha sufrido un significativo desgaste, ha sido derrotado en un tema fundamental -el del control del capital financiero- y, lo más grave, parece ir sin rumbo ni estrategia.

Analicemos el proceso que nos ha llevado a tan singular paradoja.

La lucha en la escena política

En la primera vuelta, el economista Rafael Correa recogió la movilización democrática de las capas medias de Quito y Cuenca, los *forajidos* que derrocaron a Lucio Gutiérrez.

Hoy que el *forajidismo* ha entrado en franca descomposición, destacan con claridad su significado y sus límites. Efecto de la influencia mediática que concentraba los imaginarios sociales -la lucha social

Una perpetua encrucijada

Julián Quito

concomitante- en la escena política, convirtiendo al Congreso y a los partidos en una suerte de esponja -a manera de los progroms zaristas que desviaban hacia los judíos el odio de los campesinos y las masas plebeyas-, los *forajidos* arrebataron a los movimientos sociales, y en particular al movimiento indígena, la conducción de la lucha social, y la encaminaron a un confuso odio al régimen político, desde una óptica moralista y de respeto a las instituciones.

El triunfo electoral de Rafael Correa en la segunda vuelta, en cambio, fue expresión de una realidad mucho más amplia y diversa: el Ecuador profundo de los trabajadores, campesinos, indios, negros, cholos, montubios, sectores populares urbanos, las madres del bono solidario, los trabajadores ocasionales, los desocupados, los que sufren persecución de la justicia... Fue un poderoso movimiento antioligárquico y antiimperialista que recogió las grandes luchas de los movimientos sociales, el movimiento indio a la cabeza, en contra el TLC, la Base de Manta, el Plan Colombia, las transnacionales petroleras y el poder imperial, encarnados en el candidato rival de Correa, Alvaro Noboa.

Empero, durante la primera fase del Gobierno, marcada por la lucha por la convocatoria a la Asamblea Constituyente, volvió a imponerse el horizonte de la primera vuelta: el SI marcó el fin de la llamada "partidocracia", del sistema vigente imperante en los últimos 20 años y que ha quedado en ruinas.

La lucha contra la "partidocracia" expresaba uno de los niveles de la crisis global que vive el Ecuador: el del régimen político que surgió en la reforma de 1978. Entonces el régimen oligárquico, fundado en el gamonalismo con-

servador y el caciquismo liberal, estaba en franca descomposición en la medida en que sus bases estructurales fueron liquidadas por la reforma agraria y la modernización económica de los 60 y 70. La modalidad de referéndum para elegir la nueva Constitución, elecciones directas de Presidente y de diputados nacionales de un parlamento unicameral, el voto a los analfabetos y otras reformas, propiciaron el surgimiento y consolidación de un naciente régimen político, fundado en nuevos partidos de ciudadanos -ID, Democracia Popular, Social Cristiano e Izquierda-, fuertes organizaciones sociales y renovadas instituciones; régimen que expresaba el ascenso de una burguesía industrial gestada gracias a la intervención del Estado.

El cambio del régimen político supuso también una renovación de las elites, y las viejas figuras -Velasco, Plaza, Huerta Rendón, Durán Ballén, Asad Bucaram-, pasaron a "mayor gloria de dios" y dejaron su lugar a nuevos líderes: Jaime Roldós, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y otros.

El esplendor del nuevo régimen no duró mucho. La crisis de 1982 y el paso al programa neoliberal erosionó sus bases de sustentación. El debilitamiento del Estado y del desarrollo industrial, la creciente informalización de la economía y el deterioro de los viejos movimientos sociales, lo minaron progresivamente. La descomposición se dio en los partidos y en el Parlamento: cambio masivo de camisetas, retorno al viejo clientelismo electoral, pérdida de todo proyecto. La "globalización" afectó a todas las clases, y a los pobres en el terreno económico, pero sobre todo a la burguesía en el terreno histórico, clase que perdió todo proyecto nacional, convirtiéndose en una melcocha de importadores, banqueros

usureros y hombres de paja del poder. Un golpe mortal lo dio la crisis del 2000 que, amén de la gigantesca estafa que significó, resquebrajó al capital financiero nacional, sobre todo el de la oligarquía guayaquileña, y convirtió a los banqueros sobrevivientes en estafadores del país, a través de los bonos dólares. Al perder el rumbo, líderes y partidos fueron presas de la corrupción y de la anticorrupción, de la politiquería y de la antipolítica, estrategias ambas del imperio para liquidar todo proyecto de país o de región.

Tal crisis derrumbó a la Democracia Cristiana y dejó al garete a los otros partidos. El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, la elección de Rafael Correa y el SI a la Constituyente demolicieron a los restantes partidos y al Congreso como institución representativa. Fue una suerte de rebelión de los representados.

La lucha en el nivel del poder

Con el triunfo abrumador del SI a la convocatoria a la Constituyente del 15 de abril del 2007 concluyó la lucha contra la "partidocracia". Se entendía que el Gobierno enfrentaría el nivel más profundo de la crisis, la del proyecto neoliberal que no sólo ha provocado mayores índices de miseria y desocupación sino una quiebra del aparato productivo que únicamente sobrevive gracias a los mejores precios del petróleo y a las remesas de los migrantes; fondos que alimentan las importaciones y no un genuino desarrollo nacional.

El neoliberalismo ha propiciado la erosión del Estado como factor de cohesión social y nacional, en tanto ha transferido los ejes de decisión del país al capital multinacional y al poder imperial. Nos encontramos frente a una reestructuración del poder mundial, en el que países como el Ecuador aparecen como inviables. La solución de la fragmentación "microregional" -Santa Cruz en Bolivia, la cuenca del Guayas en el Ecuador, Zulia en Venezuela, la Patagonia en la Argentina- emerge en el horizonte de la estrategia imperial.

El contundente triunfo del SI puso en el centro de la escena esa lucha sea por la vía de la

elaboración de la nueva Constitución sea por la acción del Gobierno de Correa en torno a reformas fundamentales.

Las primeras actitudes del Gobierno, en los días posteriores al 15 de abril, parecieron ir por ese terreno

En efecto, las declaraciones respecto a las Maniobras Unidas, la distancia frente al FMI y el Banco Mundial, la inicial oferta de denunciar el Tratado de Protección de Inversiones firmado con los EE.UU., pretendían definir una clara política de defensa de la soberanía al tiempo que el apoyo decidido al Banco del Sur, la participación activa en la formación de UNASUR y la asistencia, aun cuando a título de observador, en las reuniones de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), marcaban una voluntad de propiciar la integración de Suramérica, adhiriendo a las posiciones de la izquierda continental.

Por otra parte, el proyecto de regular y disminuir las tasas de interés, la integración de una Junta Bancaria independiente de los grandes bancos, expresaban un claro enfrentamiento con el capital financiero.

A la par, la confrontación con Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil y mentor del separatismo oligárquico, y con los medios de comunicación parecía conducir a un parte-aguas de hondo significado histórico: el dominio imperial y el capital financiero y su entrelazamiento con los principales medios de comunicación, que han sido las fuerzas centrales que han impuesto en el Ecuador el proyecto neoliberal -apertura indiscriminada de la economía, política de privatizaciones y de preeminencia de las inversiones norteamericanas, estancamiento productivo, predominio del capital especulativo- y lo han llevado a vivir al borde del abismo, dependiendo exclusivamente de los altos precios del petróleo y de las remesas de los migrantes.

La derecha reacciona

Empero, a pesar de la contundencia del triunfo electoral del 15 de abril, no fue afectada seriamente la estructura económica y de

poder. Derrotada en la escena política, la derecha se concentró en el nivel del poder: el sistema financiero y los grandes medios de comunicación colectiva. Y obtuvo una contundente victoria en torno a la Ley bancaria, recuperando el control del Congreso. A la par, ha logrado debilitar el sentido de la Asamblea Constituyente, obstruyendo cualquier perspectiva de liquidar las estructuras del poder que dos décadas de neoliberalismo han creado.

Y, a nuestro juicio, parece haber represado el proyecto de transformaciones estructurales que amplios sectores esperaban del Presidente Correa.

El gobierno exhibe algunas medidas de beneficio popular: el aumento del bono solidario y de vivienda, el subsidio al consumo de electricidad de los sectores populares, entrega de insumos agrícolas a los campesinos, créditos preferenciales para los pequeños negocios. Pero, no ha emprendido ninguna medida en los temas fundamentales: la deuda externa, los contratos petroleros y mineros, la estructura agraria.... Más aún, en el terreno internacional se ha acercado a los gobiernos de Brasil y Chile, y se ha alejado de los miembros del ALBA: Venezuela, Bolivia, Cuba.

En lugar de concentrar fuerzas populares para un programa de reformas estructurales, el gobierno se ha alejado de la izquierda y de los movimientos sociales -en particular del movimiento indio- y ha emprendido una práctica reiterada que se va transformando en estilo de gobierno: el discurso presidencial marca el "programa máximo" que inicia un ámbito de negociaciones que lo van reduciendo a una suerte de "programa mínimo". Así ocurrió con el enfrentamiento con la oligarquía guayaquileña y su proyecto Singapur o Hong Kong representada por el Alcalde Jaime Nebot, y con el Tratado de Protección de inversiones. Y así, finalmente, ocurrió con la Ley bancaria.

La confrontación con los medios de comunicación ha mostrado los límites políticos e ideológicos del propio Presidente Correa. En lugar de un enfrentamiento con los dueños de los medios de comunicación y a su entrelaza-

miento con el capital financiero -los principales canales de TV pertenecen a los grupos financieros de los Isaías y del Banco del Pichincha-, Correa se metió en un desgastante pugilato con los periodistas.

La combinación de enfrentamiento verbal en la escena y negociación -o incluso rendición- en el terreno del poder, es una política auto-destructiva y muy peligrosa y está llevando al Gobierno a un callejón sin salida. La derecha ha logrado recuperarse después de los terribles golpes que sufriera y que la dejaron sin partidos y sin base social: ha fortalecido la alianza de poder y ha derrotado al gobierno. Y ha iniciado la recuperación de las capas medias, la base de los forajidos.... Si Correa obtuvo más del 80% de la votación en las elecciones de abril, porcentaje mayor que los obtenidos por el Coronel Chávez y Evo Morales, es por que tras sus banderas, junto a los sectores populares estuvieron las capas medias que, en cambio, constituyen la base social de la derecha en Venezuela y Bolivia.

La derecha ha emprendido una abierta conspiración que recuerda a la derecha venezolana del golpe de Estado, la huelga de PDVSA y los llamamientos a la violencia política. La virulencia de los medios de comunicación ha llegado a niveles inimaginables. Su objetivo es atraer a las capas medias, utilizando en contra del Gobierno los imaginarios forajidos. Cabe pensar que en otro momento pretenderá movilizar a dichas capas en una política de emplazamiento y aun derrocamiento.

Sin duda, el odio al poder -mafias políticas, banqueros, medios de comunicación- del pueblo ecuatoriano, mantiene todavía altos los índices de popularidad del Gobierno. Pero, no es la lucha contra el Congreso y la partidocracia -ya muertos y enterrados- lo que pueden mantener vivo ese apoyo. Solo un cambio de estrategia que comprenda la alianza con los sectores sociales para un programa de profundas reformas estructurales puede conservar ese apoyo y derrotar a la derecha.

La Asamblea Constituyente es el otro gran frente de la lucha política. La derecha ha plasmado un programa muy concentrado:

autonomías regionales, aumento de las penas, permanencia de la dolarización y de la llamada economía social de mercado. La centro-izquierda, que bien puede convertirse en el árbitro dirimente, pretende concentrar los debates y resoluciones en la Reforma Política. El Gobierno y la izquierda, lamentablemente, no han logrado desplegar en el imaginario social el programa de reformas económicas y políticas que desmantele el régimen neoliberal y cambie la estructura de la economía y del poder.

El único camino posible

Desde hace varios años, el Ecuador vive una encrucijada permanente entre la supervivencia de un proyecto neoliberal en crisis y la emergencia de otro horizonte. Con el triunfo de Correa y del SI a la Constituyente, el Ecuador parecía haber tomado un rumbo definitivo.

La Izquierda, los movimientos sociales y el propio gobierno han delineado los contenidos de ese rumbo:

Construcción de la soberanía del pueblo sobre todos los órdenes de la vida nacional, de la soberanía plena del Ecuador sobre su patrimonio, con la estricta prohibición de bases o tropas extranjeras, sobre sus recursos naturales, servicios fundamentales y áreas estratégicas; sobre la conducción de la economía, manteniendo total independencia frente a los organismos financieros internacionales, los conglomerados transnacionales y las presiones geopolíticas norteamericanas.

Pero tal aspiración quedará en letra muerta si no se enfrenta de manera decidida la deuda externa, cuyo pago condena a nuestros países a la agonía perpetua.

Hay que derrotar a la banca y el capital financiero que sacrifica el país al consumo suntuario por la vía de las importaciones y que expresa los intereses antinacionales de esa burguesía de distribuidores que ha perdido toda sangre ecuatoriana.

El desarrollo del país requiere de la reactivación de la producción agrícola y pecuaria a partir de una auténtica reforma agraria, y de la producción manufacturera e industrial, en especial aquella comunitaria y autogestionaria.

Las grandes movilizaciones de los pueblos indios a partir de los 90, la presencia activa de los afro ecuatorianos en diversos ámbitos de la vida nacional, han hecho evidente el carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. La creación de estructuras político-estatales que reconozcan dicho carácter y los derechos de los pueblos indios y afro ecuatorianos es una demanda fundamental.

Las políticas de flexibilización laboral y la supresión de derechos han condenado al trabajo a la opresión y la miseria, al "trabajo basura". Urge propiciar que los trabajadores recuperen su fuerza y su dignidad que los convirtió en actores fundamentales de la historia del país.

El retorno a una visión ancestral de la naturaleza, la pacha mama de nuestros pueblos indios, el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual, la protección de las personas con discapacidades son tareas prioritarias en todos los niveles.

Condición fundamental de ese rumbo es la consolidación de una fuerza social y política que enfrente al poder imperial y oligárquico. La unidad de los movimientos sociales y del movimiento indio con los sectores populares movilizados por la acción del Presidente Correa es el camino de construcción de esa fuerza.

La doble tenaza de la Asamblea Constituyente y de la política del Gobierno serían -deberían ser- el motor de ese rumbo. Lamentablemente el actual proceso parece ir en otra dirección y el país sigue inmovilizado en la encrucijada. <<

Julián Quito es escritor ecuatoriano.

La política del gatopardo

Pablo Dávalos

El Ecuador está *ad portas* de entrar en un proceso constituyente que redacte la 20ª. Constitución Política del país, en 198 años de vida republicana. Un proceso que coincide en las formas con las recientes refundaciones constitucionales de Colombia, Venezuela y Bolivia, pero que mantiene diferencias de fondo con estos países.

En efecto, Ecuador es el único país de América del Sur que dolarizó oficialmente su economía a partir de enero del año 2000. También es el país con el mayor flujo migratorio de la subregión, de hecho, se ha calculado que cerca de un 10% de su población total ha emigrado en la última década. Las remesas de migrantes se constituyen en cerca del 7% de su producción interna bruta y son, con el petróleo, las mayores fuentes de ingresos para el país.

De otra parte, el Ecuador es un país que atravesó por todas las modalidades de ajuste, estabilización y reforma estructural preconizadas por el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Casi todas las variantes macroeconómicas de las políticas de ajuste, fueron experimentadas por la economía ecuatoriana: desde el control a los tipos de cambio por el establecimiento de bandas, hasta la liberación total y finalmente la sustitución monetaria por el dólar.

Cuando la economía ecuatoriana empezó las políticas de ajuste, en 1982, las tasas de interés no superaban el 12% y existía una estrategia de industrialización que implicaba empleo, seguridad social y leyes de protección laboral. Los salarios alcanzaban a cubrir hasta el 100% de la canasta básica y su participación en la renta nacional llegaba a cerca del 40%.

Luego de dos décadas de ajuste y reforma neoliberal, las tasas de interés superarían el 90%, el país se había convertido en importa-

dor de productos que antes los realizaba su industria nacional, los salarios apenas alcanzan a cubrir un tercio de la canasta familiar, y la participación de los salarios en la renta nacional cayó al 15%, y el desempleo creció en forma alarmante y fue el motor de la migración al exterior.

En este periodo, la inversión pública en salud, educación y bienestar social cayó dramáticamente, mientras que los pagos por concepto de deuda externa absorbían cerca de la mitad de todo el presupuesto gubernamental. La ortodoxia neoliberal fue tan drástica y exigente, que se llegaron a aprobar leyes que impedían cualquier inversión pública en las áreas sociales, y en la eventualidad de que el gobierno tuviese posibilidades de acceder a mayores recursos financieros, producto de mejores precios del petróleo, por ejemplo, esos nuevos recursos deberían ir a una cuenta especial para el pago de la deuda externa, conocida con el nombre de FEIREP.

Se llegó al extremo de declarar los principios neoliberales de "economía social de mercado", y "descentralización del Estado", como principios constitucionales, y de hecho fueron incorporados en el texto constitucional de 1998. En ese texto constitucional se llegó incluso a criminalizar la protesta social y a la organización sindical.

Impacto del ajuste

En las dos décadas de ajuste neoliberal, el Ecuador destruyó la mínima base industrial que poseía, desarticuló sus marcos institucionales públicos que garantizaban el empleo y la regulación a los mercados, erosionó la confianza en sus instituciones políticas, y llevó adelante un modelo de exportaciones de bienes primarios, fundamentalmente petróleo y banano, liberalización comercial y financiera,

y privatizaciones, con enormes costos sociales, institucionales, humanos y ecológicos.

Para evitar que la pobreza, que las políticas de ajuste generaban, se convierta en un fenómeno político que impida la imposición del modelo neoliberal, el Banco Mundial y el BID, crearon una serie de redes clientelares que se sustentaban en el asistencialismo y la corrupción.

El Banco Mundial llegó a crear proyectos específicos para aquellos actores sociales que podían convertirse en sujetos políticos determinantes en la resistencia al neoliberalismo. La intención de estos proyectos era la de neutralizarlos políticamente, destruir sus capacidades organizativas, y corromper sus dirigencias y cuadros políticos convirtiéndolos en tecnócratas del desarrollo. Para el movimiento indígena, el Banco Mundial creó el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) para los sectores campesinos y rurales creó el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL), para el movimiento de mujeres aplicó el Programa de Género e Innovación para América Latina (PROGENIAL).

Estos proyectos se insertaban en una red más vasta de proyectos que comprendían las microfinanzas, las microempresas, el desarrollo local, la participación ciudadana, etc., y cuya finalidad era la de crear las condiciones políticas necesarias y suficientes para consolidar el modelo neoliberal con el consenso social.

Sin embargo, el Ecuador ha sido también el espacio en el que las resistencias sociales al neoliberalismo han sido importantes. En la década de los años ochenta, la resistencia a las políticas de ajuste fue liderada por las organizaciones obreras. Las políticas de flexibilización, tercerización, maquilas y desarticulación sindical, restaron el peso político a la clase obrera ecuatoriana, pero en la década de los noventa, emerge con fuerza el movimiento indígena.

Toda la década de los noventa estará signada por la presencia indígena; de hecho, en 1999, los indígenas serán determinantes para evitar

la adopción de un duro paquete de ajuste económico impuesto por el FMI, y al año siguiente provocarían la caída del presidente demócrata cristiano Jamil Mahuad. Para las elecciones del año 2002 apoyarán al coronel Lucio Gutiérrez, y ganarán las elecciones de ese año. Sin embargo, Lucio Gutiérrez traicionará al movimiento indígena y se convertirá en un aliado fundamental de Estados Unidos, dedicándose en su gestión gubernamental a perseguir y tratar de destruir a los indígenas, sus supuestos aliados políticos.

Visiones diferentes

Sobre este escenario, de corrupción, pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, y desgaste del sistema democrático, provocados por la imposición neoliberal, se producen procesos de diferenciación social al tenor de la dolarización de la economía y el fenómeno de la migración.

Las clases medias, que fueron las más afectadas por la crisis financiera y monetaria del año 1999-2000, empiezan a convertirse en importantes actores políticos. En efecto, la dolarización de la economía, al tiempo que destruye las posibilidades de reactivación económica del país, se constituye en garantía de estabilidad para las clases medias. La dolarización se ve reforzada por las remesas de migrantes que de cerca de mil millones de dólares del año 2000, crecen a más de 3 mil millones de dólares para el año 2006. De igual manera con el precio del petróleo que multiplica los ingresos fiscales. La economía ecuatoriana crece pero lo hace agravando las inequidades sociales. El crecimiento se sigue sustentando en bienes primarios y la dolarización agrava al sistema de precios destruyendo al sector agropecuario.

Mientras que los campesinos pobres, los indígenas y los sectores subproletarios de las grandes ciudades se convierten en los damnificados de la dolarización, las clases medias ven en la dolarización la garantía de estabilidad económica que el país no tenía. Son dos sectores sociales que tienen visiones diferentes de país. Los sectores más pobres, al momento de las elecciones tratan de que sus

votos tengan un peso estratégico, es decir, negocian sus votos por promesas concretas que tienen que ver en lo fundamental con el empleo y los ingresos; mientras que las clases medias utilizan los espacios electorales para reclamar por estabilidad y transparencia.

Estas dos visiones de país se encuentran y ratifican en las elecciones del año 2006. De una parte, está la votación del magnate Alvaro Noboa y del partido de extrema derecha Sociedad Patriótica, que captan el voto de descontento con la dolarización y la pérdida de empleos; y, de otra, están las clases medias que apoyan a Rafael Correa de Alianza País, y a León Roldós del movimiento Red Ética y Democracia (RED). Finalmente ganará la presidencia el candidato de Alianza País por un cambio estratégico de campaña de última hora.

Sin embargo, para poder convencer a su electorado de la radicalidad de su propuesta de moralizar al sistema político y garantizar la estabilidad económica, el candidato de Alianza País, reniega de sus críticas a la dolarización, y se niega a inscribir candidatos a diputados argumentando que el Congreso Nacional es la fuente de todos los males.

Esta jugada le permite efectivamente ganar las elecciones, pero le resta cualquier posibilidad de gobernabilidad al no tener una mínima base de apoyos en el Congreso Nacional. Es desde la necesidad de recuperar los espacios de maniobra en los espacios de la legalidad que el nuevo gobierno le apuesta todo a la Asamblea Constituyente.

Para ello, utiliza las mismas redes clientelares y los mismos tecnoburócratas del Banco Mundial y del BID, para generar adscripciones y comprar lealtades al gobierno. El régimen de Alianza País sabe que existe un enorme descontento con las instituciones democráticas y con la clase política tradicional. Por ello, administra ese descontento con una estrategia doble; de una parte, consolida una serie de prácticas clientelares y asistencialistas basadas en un populismo de Estado, que utiliza una retórica nacionalista e izquierdizante; y, de otra, apela a la sensibilidad de las clases

medias morigerando su discurso crítico y estableciendo la estabilidad y la moralización del sistema político como los ejes determinantes de la nueva Asamblea Constituyente.

Empero de ello, para que esta estrategia sea coherente, fue necesario un proceso previo de vaciamiento de todos los discursos políticos que eran críticos con el modelo neoliberal, y posicionando un proceso de refundación política que pone el contador a cero de todas las resistencias y movilizaciones sociales en contra de ese modelo neoliberal.

Es por ello que en las listas de candidatos del gobierno, no existen representantes de las organizaciones sociales, populares, campesinas o indígenas (con las excepciones que confirman la regla), pero existen representantes de las nuevas clases medias y de las nuevas élites económicas que reclaman espacios políticos en esta coyuntura. Estos sectores, una vez electos a la Constituyente, se convertirán en una garantía que perpetúe las relaciones de poder nacidas al calor del neoliberalismo.

En estos meses de gobierno de Alianza País y de retórica de socialismo de siglo XXI, no ha sido desarticulado ni uno solo de los mecanismos que aseguran el engranaje neoliberal, todo lo contrario, las señales apuntan a una deriva peligrosa en lo social con la invisibilización de las resistencias sociales al modelo neoliberal, con la metabolización de las organizaciones sociales al gobierno utilizando la maquinaria del Estado, y una deriva depredatoria en lo ecológico que alcanza los niveles de crimen ecológico como es el caso de la apertura a la pesca indiscriminada de especies protegidas, o la intención gubernamental de destruir el Yasuní con la explotación petrolera. Cabe preguntarse en ese escenario: ¿no se está generando un *déjà vu* con este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No se está acaso tratando de tomar los simulacros del poder como las realidades de la política? ¿No se está entrando acaso en la lógica del gatopardo en la que todo se mueve para que nada cambie? <<

Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

Realineamiento internacional

Roger Burbach

El gobierno de Rafael Correa en Ecuador representa un contrapunto significativo para los intereses de los Estados Unidos y sus aliados internos históricos, conocidos a menudo como la "partidocracia." No se trata de un gobierno como el de Tabaré Vázquez de Uruguay, que a la vez que mantiene un discurso izquierdista, recibió a George Bush durante su viaje relámpago a América Latina en marzo y sigue adelante con las negociaciones de un acuerdo comercial neoliberal con ese país.

Con Correa, se está consolidando en Suramérica un eje izquierdista de naciones que comprende a Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se opone a la dominación histórica de EE.UU. Y al igual que Hugo Chávez y Evo Morales, Correa se propone emprender profundos cambios sociales y económicos en su país. Desde su discurso inaugural del 15 de enero, el nuevo mandatario lanzó un llamado para construir un "nuevo socialismo del siglo XXI" y declaró que Ecuador tiene que poner fin al "sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad".

El gobierno de Correa es una expresión del auge popular de una nueva izquierda en América Latina, que está adoptando enfoques y estrategias innovadores para renovar a sus sociedades. Con el derrumbe del Marxismo-Leninismo, se ha venido cuestionando el principio central de éste, de que el Estado burgués sólo se puede transformar con la revolución y la toma del poder estatal. Bajo el comunismo, el poder quedaba concentrado en el aparato del partido que controlaba el Estado. En contraste, el nuevo modelo de transformación del Estado que emerge en América Latina tiene sus raíces en la construc-

ción de una amplia coalición política, basada en una aglomeración compleja de actores y movimientos sociales progresistas. El propio papel de los partidos políticos en este proceso es tema de debate intenso. Muchas personas rechazan la centralidad de los partidos, con el argumento de que son intrínsecamente jerárquicos (y a menudo patriarcales) y, por lo tanto, antitéticos a la participación popular auténtica. Otras afirman que es necesario crear "partidos de nuevo tipo", como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, que se autodefine como un "partido de movimientos sociales."

Primero en Venezuela y Bolivia, y ahora en Ecuador, se ha convocado a asambleas constituyentes para "refundar" la nación. Pero el hecho de redactar una nueva constitución sin haber previamente desmantelado el Estado burgués-oligárquico, y cuando los partidos políticos tradicionales siguen funcionando, plantea una incógnita: ¿hasta dónde las asambleas constituyentes quedan limitadas en su posibilidad de lograr cambios? ¿Serán simplemente reformistas o establecerán un marco para un nuevo socialismo del siglo XXI?

La refundación de la nación ecuatoriana implica, entre otros puntos, un realineamiento internacional que vaya más allá de un simple rechazo a la economía neoliberal.

La Base de Manta

Durante sus primeros meses de ejercicio, el gobierno de Correa ha adoptado posturas firmes en sus relaciones con EE.UU. y las instituciones financieras internacionales. Así, ha dado a conocer que no renovará el convenio de la base militar estadounidense en Manta, la más grande de su clase en la Costa del

Pacífico en Suramérica, que expira el año 2009. Esta base fue creada con el argumento de monitorear el narcotráfico sobre el océano y en la cercana región Amazónica. Pero se ha convertido en un importante centro de operaciones de la inteligencia estadounidense y de apoyo a la coordinación de los esfuerzos contrainsurgentes contra la guerrilla izquierdista en la vecina Colombia. La pista de aterrizaje de la Base, cuya construcción costó US\$ 80 millones, puede ser utilizada por las más grandes y sofisticadas aeronaves de espionaje estadounidenses. El puerto de Manta también es utilizado para las operaciones navales de EE.UU. en el Océano Pacífico. Más de 475 efectivos militares estadounidenses rotan continuamente entre Manta y el Comando del Sur de EE.UU., ubicado en Florida.

La Base de Manta tiene poca importancia para controlar el narcotráfico en Ecuador. Si bien el país tiene condiciones aptas para el cultivo de la planta de coca, tal producción es prácticamente inexistente y nunca ha producido cocaína ni otras drogas ilícitas en cantidades significativas, para el mercado internacional. Sin embargo, después de que adoptara el dólar estadounidense como su moneda oficial en 2000, los traficantes internacionales de la droga, particularmente los colombianos, comenzaron a utilizar bancos ubicados en Ecuador para el lavado de sus ganancias ilícitas. La opinión popular en Ecuador apoya masivamente el cierre de la Base.

Tensiones en la frontera norte

En los últimos años, la guerra civil en Colombia se ha desbordado hacia Ecuador. La región Amazónica, en particular, debe lidiar con el flujo de refugiados, pero además, situaciones de violencia y conflicto social. La aspersión de herbicidas desde avionetas que parten de Colombia erradica cultivos alimenticios y envenena a niños y adultos ecuatorianos. Los gobiernos de Colombia y EE.UU. argumentan que los productos exfoliantes son utilizados solamente en el lado colombiano de la frontera y que no hay vuelos sobre Ecuador. Pero Correa discrepa vehementemente. "No permitiremos la violación continua del espacio aéreo ecuatoriano por aviones, que ni

siquiera son colombianos, sino estadounidenses," afirma. "Entran a nuestro país y después regresan a Colombia."

El gobierno de Correa está preparando una demanda ante la Corte Internacional de la Haya contra el gobierno colombiano, para que cese las fumigaciones en la zona fronteriza. La Ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, enfatizó en una reunión con la prensa extranjera que se trata de una "violación de derechos humanos; no es solamente una cuestión de efectos en la salud, sino también de los traumas psicológicos causados por los constantes sobre vuelos" que aterrorizan a la población local, particularmente a los niños. Una misión de investigación científica ecuatoriana, y otra de la ONU, han ratificado que las aspersiones son altamente nocivas para la salud. Determinaron que desde el inicio de las fumigaciones, ha aumentado en un 30 por ciento el riesgo de contraer cáncer, en un 20 por ciento el índice de abortos y en un 10 por ciento la posibilidad de tener hijos con malformaciones². Colombia aún se niega a reconocer que sean tóxicas.

Acuerdos comerciales

El gobierno de Correa también se está moviendo hábilmente para romper con las políticas comerciales neoliberales que han sido impuestas a Ecuador por Washington y los organismos de crédito internacionales. Conforme con su plataforma de campaña, el presidente ha reafirmado que él nunca firmará el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., cuya negociación ya fue suspendida por el anterior gobierno.

Ecuador ha abierto la negociación bilateral de acuerdos económicos y comerciales especiales con los presidentes Chávez y Morales. Correa ha firmado varios acuerdos petroleros

- 1 Burbach, "The Pink Tide Flows," *The Guardian* (London), March 16, 2007, http://commentisfree.guardian.co.uk/roger_burbach/2007/03/the_pink_tide_flows.html.
- 2 "Ecuador demandará a Colombia en la Haya", *El Comercio*, Quito, 3 de julio 2007.

con Venezuela, de los cuales el más importante es un proyecto de US\$ 4 mil millones para una refinería, que será construida por PetroEcuador, la empresa estatal, y su contraparte venezolana, PDVSA. Venezuela ha aceptado también refinar petróleo ecuatoriano y ayudar a financiar programas sociales en Ecuador. Con el gobierno boliviano se ha concluido un acuerdo para importar comestibles de pequeños y medianos productores ecuatorianos.

Si bien no se ha producido ninguna confrontación directa con EE.UU. en torno a la reafirmación de la soberanía ecuatoriana, el Pentágono ha manifestado su disgusto. Cada año desde 1959, el Comando Sur de ese país, junto con las naciones de la costa pacífica de América del Sur, ha emprendido los ejercicios navales conjuntos llamados Unitas. Este año, Ecuador debía ser el anfitrión, pero EE.UU. optó por realizarlos en Colombia, su aliado regional más cercano. Ecuador respondió con el anuncio de que no participaría en los ejercicios de este año y Correa proclamó que: "Parece que el Comando Sur cree que somos una colonia de EE.UU., que nuestra marina de guerra es apenas una unidad más controlada por su país."³

La "Oxy"

Correa también se está enfrentando a la empresa Occidental Petroleum ("Oxy"), una corporación con sede en EE.UU., cuyas instalaciones en Ecuador fueron revertidas a PetroEcuador el año pasado, por haber traspasado parte de ellas a una empresa canadiense, violando su contrato con el Estado ecuatoriano. Importantes reservas de petróleo fueron descubiertas en el oriente de Ecuador en los años 60, inaugurándose una bonanza petrolera, cuando las corporaciones transnacionales se apresuraron a explotar los yacimientos, durante los años 70. Estas corpora-

ciones explotaron brutalmente la selva tropical, habitada durante milenios por indígenas, derramando contaminantes desde los millares de pozos de exploración y explotación y las piscinas de desechos. Como los conquistadores del siglo XVI, las corporaciones devastaron comunidades indígenas con el desplazamiento, las enfermedades y los esfuerzos por sobornar y dividir a los habitantes. Explotaron duramente a los trabajadores, muchos de los cuales fueron llevados desde la Sierra, porque la mayoría de los indígenas de la selva se negaron a trabajar.

Con la recuperación de las concesiones de la Occidental, PetroEcuador ahora controla más de la mitad de las exportaciones del petróleo del país. Éstas dan cuenta de cerca del 40% de las exportaciones totales de Ecuador y un tercio de los ingresos fiscales. Mientras tanto, Correa ha denunciado que Occidental está haciendo "lobby" con la administración Bush para recuperar sus concesiones. "No permitiremos que una transnacional arrogante, prepotente e irrespetuosa del marco jurídico ecuatoriano, dañe la imagen del país", afirmó.

En Ecuador, así como en muchas partes de América Latina, somos testigos de una revolución desde abajo, un despertar popular que cuestiona la dominación tradicional de EE.UU. y exige un nuevo sistema del gobierno que responda a los intereses y a las necesidades de las clases populares. Esta rica amalgama de fuerzas de base es lo que está abriendo nuevas perspectivas en América Latina, mientras que gran parte del mundo se encuentra sumida en la violencia y la destrucción provocadas por la arrogancia imperial del régimen de George W. Bush. <

Roger Burbach es director del *Center for the Study of the Americas* -CENSA-, basado en Berkeley, California. Su artículo: "Ecuador's Popular Revolt: Forging a New Nation," aparecerá en la edición de septiembre-octubre de *NACLA's Report on the Americas*. (Ver www.nacla.org).

3 "La Cancillería alista una nota de protesta contra EE.UU.," *El Comercio* (Quito), May 7, 2007.

Momento de quiebre

Oswaldo León

"La revolución ciudadana encuentra en la estructura de poder o la estructura de las relaciones de poder de la sociedad ecuatoriana, un límite muy fuerte. Vale decir, como que aquello que se desarrolla a nivel de la conciencia social, de los individuos, de las personas, de los movimientos sociales y todo esto, no puede concretarse, materializarse, a nivel del ámbito de lo político", sostiene el sociólogo **Milton Benítez**, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A su juicio, esta situación está relacionada con "el modo como se ha constituido la dinámica social y la dinámica política" en Ecuador. Este es el diálogo que sostuvo con ALAI.

- *El gobierno del presidente Rafael Correa llegó al gobierno con la bandera de la llamada "revolución ciudadana". ¿Cuál es tu lectura sobre este proceso ya en concreto?*

En Ecuador, como en América Latina, podemos constatar que no hay una relación de coincidencia entre la dinámica social y la dinámica política, lo que hace que en el momento cuando la dinámica social salta a lo que sería la dinámica política, se produzca un fenómeno de implosión de lo social. Posiblemente esto tiene que ver con este modo de constitución histórica del Estado ecuatoriano y latinoamericano, que lleva a que se produzca un fenómeno de cooptación, de monopolización del poder. O sea, como que el monopolio del poder está en esta distancia, en esta no coincidencia entre lo que es lo político y lo social. Y esto como que da lugar a los ciclos del movimiento social y del movimiento político. Mientras la lucha está ubicada en el terreno

de lo social, se puede observar un fenómeno de crecimiento de lo social, de desarrollo de las inquietudes por la transformación, de la formación de una conciencia crítica, de una clara visión de lo que son los problemas de la sociedad; pero cuando se salta de la dinámica social a la dinámica política, lo que sucede es que se produce un fenómeno de desestructuración de lo social.

Se trata de un fenómeno que se repite. Por ejemplo, si nos vamos a la década del 70, ahí tenemos que hay un periodo bastante largo, de unos 10 años más o menos, de surgimiento y desarrollo del movimiento obrero ecuatoriano en circunstancias en que estas luchas se ubican en el plano social, pero inmediatamente en que se da este proceso de apertura a la democracia y la dinámica de la sociedad salta del espacio social al espacio político, se produce este fenómeno de implosión del movimiento sindical.

Lo mismo podemos ver luego, en la década del 90, en relación a la dinámica del movimiento indígena y de otros movimientos sociales, que se fortalecen, se robustecen, mientras se ubican en el terreno de la lucha social; pero cuando salta al terreno de la lucha política como que se da este fenómeno de implosión, de desorganización, de desconstitución.

Entonces, me da la impresión de que en este momento está pasando lo mismo. O sea, como que estamos volviendo a un nuevo ciclo en ese punto en el cual la apertura del ámbito político, la ubicación del ámbito político como espacio de la lucha, está llevando a una desorganización de lo social, a una especie de

languidecimiento, de desorientación, de los movimientos sociales.

Hay que tener presente que el gobierno actual, al igual que el anterior, es resultado de esa fuerza de lo social. Son gobiernos puestos por los movimientos sociales; es decir, es esa emergencia de lo social lo que hace que estos gobiernos, como el de Gutiérrez en su momento, se conviertan en representantes de lo que son los intereses de los sectores sociales. De alguna manera, por el origen, digamos así, son gobiernos de origen popular, que se corresponden a la dinámica de los movimientos sociales.

Pero en el momento en que desde el gobierno, desde el poder, se han de dar las condiciones para el fortalecimiento de lo social, vemos que se produce este decaimiento y que sobre la base de esta dinámica se crean las condiciones para la reproducción de lo mismo, es decir, para el mantenimiento del orden político que garantiza los intereses de los de siempre; o sea, de la derecha ecuatoriana.

Este asunto nos remite al tema de la constituyente propiciada por el propio movimiento social, como condición para la reorganización política de la sociedad ecuatoriana, para que cree las bases de un orden político nuevo, ante la cual como que no logra articularse, como que se va pasmando, sin encontrar la posibilidad de lo que podría ser un proceso de continuidad al ámbito político desde el punto de vista de lo que son los intereses de los diferentes grupos sociales.

- *Decías que son momentos en los cuales se asiste a una desorganización de lo social, ¿pero acaso este fenómeno no resulta todavía más sensible en el mundo de la política cuyas implosiones son cada vez más profundas?*

Eso tiene que ver con el hecho de que los grupos de poder tradicionales y los grupos políticos tradicionales, ya no tienen absolutamente nada que aportar, responde a la absoluta esterilidad en la cual están en el momento actual

estos grupos relacionados con las clases dominantes. O sea, en términos gramscianos: son clases dominantes pero ya no son clases dirigentes, porque ya no tienen nada que ofrecerle a la sociedad.

Esto hace, evidentemente, que colapse la propia dinámica política, de modo que la implosión política es en el fondo la implosión política de la derecha. Y, por otro lado, vemos que hay una explosión social pero cuando se acerca al ámbito de lo político, también implosiona, de ahí ese decaimiento del ritmo de la lucha política, que tiene que ver con este fenómeno de agotamiento de lo que serían las posibilidades políticas que las clases tradicionales ya no están en condiciones de ofrecer en el momento actual.

Entonces, hay una circunstancia que podría ser favorable para la emergencia de lo social a la política, pero también parecería ser que lo social aún no es. O sea, estamos en este *impasse*: lo que viene del pasado y que ha conservado el dominio de los sectores de poder tradicionales, ya no es, ya no va más, como que está autoaniquilándose en su propia dinámica; pero en cambio lo social, que es lo que debería venir a sustituirlo, aún no es. A mi modo de ver esto responde al hecho de que estaríamos viviendo un momento de los movimientos sociales en el que no se han creado aún las condiciones políticas propias en las que se expresen esos movimientos sociales, y están tratando de expresarse o de reconocerse en lo que serían las formas tradicionales, entonces esto seguramente es la causa que lleva a lo que sería esa implosión de lo social.

- *¿En qué medida aquí cuenta el fenómeno de la mediatización de la política?*

Una acción importante del gobierno actual es que ha logrado destruir ese espacio de legitimación de la política de la derecha, todo eso que va ligado a lo de la partidocracia, su lógica, su forma de subsistencia y todo lo demás. Sobre la base de esa deslegitimación ha creado la posibilidad de que el pueblo tenga las condiciones para una visión distinta de lo que debería ser el quehacer político. Esto es

importante, porque abona al desarrollo de la democracia, al desarrollo de una conciencia y una democracia popular.

Parte de ese proceso de deslegitimación está ligado a la presencia de las figuras políticas y sus prácticas políticas en el ámbito de la imagen. Esa construcción que se hace desde los medios, que era uno de los elementos fundamentales de la derecha para hacer posible la legitimación de sus representantes y de sus prácticas, está definitivamente desmantelada, y eso es extremadamente bueno.

Pero el gobierno de Rafael Correa no ha golpeado en esos otros niveles en donde está el poder ya no como imagen, como representación, sino como poder real. En ese punto no se ve que haya habido acciones que permitan al menos su descohesión, por lo que en ese nivel los grupos de poder siguen intocables.

- *¿Cómo explicas el énfasis del accionar del gobierno en cuanto a imagen, opinión, medios de difusión, etc.?*

Considero que le resulta fundamental porque abona en beneficio de lo que es la cohesión y la legitimación del propio gobierno, permite mantener la expectativa, que se ha sostenido durante un largo tiempo, pero es peligroso si se queda solo ahí, porque se puede producir un fenómeno de desesperanza de la gente, y me parece que es algo que ya está sucediendo.

La constituyente, por lo tanto, es un momento de quiebre, un momento de inflexión importantísimo, porque en ese espacio habría las posibilidades, en caso de que los sectores de la tendencia de izquierda en general tengan un buen número de representantes, de que se pase de esta lucha mediática, de esta lucha de imágenes, de esta lucha de palabras, a lo que podría ser acciones que se vean en el campo de lo que son las relaciones de poder.

- *En ese sentido, ¿cuáles consideras como desafíos clave para los movimientos sociales?*

Como temas fundamentales que los movimientos deben mantener, en primer término está luchar en contra de los efectos inevitables que tienen que ver con lo que son los procesos electorales, porque como los procesos electorales se han constituido en el territorio de lo que es la institucionalidad burguesa, tienden a distraer y a desorganizar a los sectores populares, a los movimientos sociales. Este es un peligro real, al que más atención se le debe prestar, pues las elecciones tal como están concebidas producen ese fenómeno de distraer a los sectores sociales de lo que son los objetivos fundamentales de su lucha. Y también a desorganizar, porque con el tema de entrar a participar en el juego electoral, ingresa la lógica de las alianzas, de los acuerdos, del fraccionamiento y todas esas cuestiones. O sea, los procesos electorales tal como están concebidos como que no sirven mucho para organizar políticamente a los movimientos sociales, sino para desorganizarlos.

A más de evitar el erosiónamiento de la organización, que me parece es clave, lo segundo es no perder de vista los objetivos fundamentales de la lucha en el momento actual, y esos objetivos tienen que ver con la recuperación de la soberanía del país, en el sentido de recuperar el petróleo, los recursos naturales, pues hay una lucha que está relacionada con la defensa de estos recursos respecto de los intereses de las grandes transnacionales. Es decir, no perder de vista el tema central de este proceso, que está orientado a lo que es la afirmación de una soberanía popular.

El tercer aspecto que me parece muy importante, tiene que ver con lo que es la cuestión internacional. Es decir, no perder de vista que estamos viviendo un proceso de emergencia de posiciones antiimperialistas en América Latina y que es indispensable en este contexto ir construyendo una red de relaciones que permitan el fortalecimiento de lo que serían estas políticas latinoamericanistas, en oposición a las grandes transnacionales, que se han convertido en el momento actual en el enemigo fundamental del desarrollo de la sociedad. <

Conflictos sociales y medio ambiente

Esperanza Martínez

Los conflictos provocados por la pesca industrial o artesanal, los paros petroleros, las movilizaciones indígenas en Esmeraldas o los cierres de carreteras al sur del país, son conflictos que parecen disgregados pero tienen algo en común: un importante contenido ambiental. Todos estos conflictos sociales que han sobresalido en el escenario político ecuatoriano, unas veces más y otras veces menos tolerados por el gobierno unas veces más y otras menos son utilizados por la oposición.

Han sobresalido cinco conflictos: por minería, represas, petróleo, deforestación y los tiburones. Los tres primeros tienen que ver con actividades que afectarían a las comunidades en sus formas tradicionales de existencia, que promueven una competencia del espacio, tanto de la tierra como del agua y que se justifican por considerarse proyectos importantes para el desarrollo nacional; y los dos últimos son conflictos que resultan de actividades que afectan a la conservación, que están caracterizadas por la corrupción, en el caso de las madereras también por la violencia, y que pretenden ser ignorados o acaso controlados por los mismos actores de la destrucción.

Las comunidades demandan sus derechos utilizando el único recurso que tienen: la movilización. Los empresarios reclaman sus ventajas y utilizan la presión y el chantaje; la prensa explota los conflictos, dependiendo de los intereses en juego, puede ser absolutamente conservacionista o brutalmente despiadada con las comunidades, cómplice en el silencio con las empresas, o desmedidamente crítica con el gobierno. El escenario se ha vuelto confuso.

El telón de fondo de los conflictos

El Ecuador históricamente se ha dedicado a explotar sus recursos naturales perjudicando su propia biodiversidad. Primero por el cacao,

luego por el banano, posteriormente por el petróleo y el camarón, las posibilidades de una vida sustentable en el campo ecuatoriano se fueron perdiendo paulatinamente. Esta depredación de la naturaleza fue de la mano del despojo y la sobreexplotación de miles de campesinos e indígenas que fueron subordinados y sobreexplotados al servicio de empresas, muchas veces transnacionales y otras administradas por un pequeño grupo de oligarcas que aumentó sus riquezas a costa del bienestar de la nación.

Esta dinámica fue aun más brutal con la llegada del neoliberalismo, pues al tiempo que aumentaron los negocios que contaminan y degradan los ecosistemas y aumentó la injusticia social a niveles nunca antes vistos, se desbarató al Estado.

Recuperar un Estado erosionado y empobrecido, pagar la deuda social, sostener el aparato del Estado, cubrir los gastos sociales, impone urgencias en materia económica, pero si esas políticas o proyectos descuidan el ambiente, continuará el despojo y la injusticia de lo importante; particularmente para aquellas comunidades cuyas formas de producción y consumo están estrechamente ligadas a la naturaleza.

El problema es que más allá de las decisiones e intenciones casa adentro, hay una estrategia global, diseñada desde los países industrializados para explotar nuestras riquezas naturales velozmente, empobrecer a la gente para contar con mano de obra que al ser "ilegal" es más barata, y por aniquilar nuestra condición de autosuficiencia de alimentos. Se trata de perpetuar un modelo de exportación de energía y materias primas e importación de todo, sobre todo alimentos. Ecuador es un país que posee varios recursos estratégicos para sostener este modelo: posee agua, biodiversidad y energía.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó *"¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional"*.

La fórmula de exportación de energía e importación de alimentos para países como los nuestros es un destino diseñado y conspirado desde el norte. Es parte de la estrategia central de Estados Unidos, país que basa su economía en la producción y exportación de alimentos. Un ejemplo de ello son los programas de ayuda alimentaria en los que introdujo alimentos transgénicos en toda América Latina

De un posicionamiento claro del Ecuador en contra de los intereses transnacionales en temas energéticos y alimentarios dependerá la soberanía, tanto en su expresión comunitaria como nacional.

Sin embargo, el anunciado Plan Nacional Agropecuario y Forestal, en lugar de la necesaria revolución agraria, promueve los monocultivos, entre otras cosas para biocombustibles, promueve la dependencia de los pequeños agricultores con relación a los grandes a base de la entrega de tecnología, créditos y control de mercados, y dedica las tierras que deberían destinarse a la producción de alimentos a productos de exportación, todo esto perpetuando y agravando algunos de los problemas que ya hay en el campo en las zonas de monocultivo, como es el uso de agroquímicos y el consumo excesivo de agua.

Si la prioridad nacional no es el campo, el abastecimiento de alimentos para el sustento nacional y el bienestar de campesinos e indígenas, históricamente marginalizados, se justificará cualquier proyecto, aun cuando haya oposición, aún cuando se presuma daño inminente, aún cuando se destruyan riquezas indispensables para la vida. Tal es el caso de las represas que afectan el acceso al agua de las comunidades y los proyectos mineros o petroleros en territorios indígenas.

Si estas agendas no superan una visión desarrollista, si se continúa tratando a la naturaleza como materia muerta, surgirán nuevos conflictos que se manifestarán primero como contradicciones con el ambiente, pero que finalmente son y serán nuevos conflictos sociales, y habremos perdido la oportunidad de diseñar un nuevo momento, post-neoliberal, que reconcilie al ejercicio de la política con el ambiente.

Un giro de las visiones económicas que las acerquen a las ecológicas, es la única manera de resolver los temas sociales en el largo plazo. Trabajos como la agricultura de subsistencia y la artesanía, en las que hombres y mujeres participaban en condiciones de mayor igualdad, no pueden ser reemplazados por actividades que generan empleo asalariado. No solo el trabajo que genera dinero es importante, aquel que reproduce la vida es realmente esencial. El país no depende de las divisas, depende de su naturaleza, ésta es el sustrato en donde se desarrolla la vida.

El dilema que se vive

La disyuntiva entre el acceso a recursos para sostener la economía, aunque sea el pago de la deuda social, y la conservación ecológica, coloca, con frecuencia, al ambiente y las riquezas naturales de un lado y a los temas sociales de otro, así se ha planteado la disyuntiva de escoger entre el interés de los pescadores o los tiburones; escoger a la educación o sacrificar el Yasuní; escoger el crecimiento económico o la conservación.

Sin embargo, es necesario dismantelar el tratamiento simple de los problemas, ¿hay relación entre la exportación de aletas de tiburón y los pescadores artesanales?, ¿El petróleo del Yasuní permitirá realmente solucionar los problemas de la educación?, para que se requiere la energía de las represas?, ¿Y para qué la actividad minera, si ésta ni siquiera paga tributos al Estado. Por el contrario de lo que comúnmente se piensa, al afectar a la naturaleza, se afectan la capacidad de sustento de las pobla-

1 George W. Bush, julio de 2001, en informe de Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación

ciones a quienes se pretende proteger, se afecta a la soberanía alimentaria de las comunidades y por lo tanto del país. En palabras de Manfred Max Neef:

"Si me dedico por ejemplo a depredar totalmente un recurso natural, mi economía crece mientras lo hago, pero a costa de terminar más pobre. En realidad la gente no se percata de la aberración de la macroeconomía convencional que contabiliza la pérdida de patrimonio como aumento de ingresos. Detrás de toda cifra de crecimiento, hay una historia humana y una historia natural. Si esas historias son positivas, bien venido sea el crecimiento porque es preferible crecer poco, pero crecer bien, que crecer mucho, pero mal". (Manfred Max-Neef, 2001)

Nos acercamos a un proceso de Asamblea Constituyente, y allí se definirá el tipo de crecimiento que queremos y podemos soportar, las prioridades nacionales, la forma de organización del Estado. En el debate está como propuesta el "Socialismo del siglo XXI". Evidentemente, hay un interés de diferenciarse del socialismo del Siglo XX e incluso del socialismo del Siglo XIX. Pero, ¿cuáles son los temas que diferencian o caracterizan al socialismo?

¿Es la redistribución de la riqueza suficiente? O debemos complementarla con la reapropiación de las riquezas. Es la naturaleza una fuente de riquezas o es el sustrato donde se desarrolla la vida. Es prioridad el crecimiento económico o lo es el bienestar colectivo?

Las luchas ecológicas que hoy en día defienden la tierra, el espacio y la vida, conforman una parte fundamental del escenario desde el cual debemos pensar esa construcción de este nuevo tipo de socialismo que pretende dar un giro a los conflictos sociales, impedir que aparezcan nuevas formas de agresión a las comunidades, y avanzar con la redistribución de la riqueza.

Principios para la nueva Constitución

Introducir en la nueva Constitución una serie de principios ecológicos puede ser una garantía para evitar que las viejas prácticas depredadoras de la naturaleza, construyan nuevas inequidades y pobreza.

El **Principio de Precaución**, por ejemplo, ha sido una herramienta fundamental para la defensa de las riquezas naturales, pero es necesario expandir su alcance y desarrollar su significado. Solo así se puede garantizar que las poblaciones actúen con oportunidad, impidiendo que, a pretexto de falta de evidencia, se cometan atropellos contra las comunidades y contra sus territorios.

Incorporar en la Constitución el **Principio de Prevalencia** que protege a las poblaciones vulnerables y a los ecosistemas frágiles, cuando hay dos intereses que se confrontan, resulta imprescindible. Este principio propone que en casos de conflictos entre dos o más intereses, se deberá proteger el de los más vulnerables. De esta manera, aquel antiguo argumento de priorizar los beneficios posibles para el conjunto de la población, en contra de intereses minoritarios, que ha justificado la mayoría de actividades desastrosas, pierde fuerza.

Frente al tema del desarrollo sustentable, que ya nadie sabe que es exactamente, es necesario desarrollar el principio de **Perdurabilidad de las Sociedades Ancestrales**. No se trata de hacer sustentable al desarrollo, sino de permitir que sean las sociedades, en sus más diversas manifestaciones, las que sean protegidas. Las sociedades ancestrales son un ejemplo de conservación de la naturaleza y poseen un inmenso patrimonio cultural que el país no puede sacrificar.

Finalmente resulta necesario y urgente el establecer protecciones para la biodiversidad, así un principio de **Primordialidad de la Biodiversidad** permitirá evitar todo intento de privatización o mercantilización de la vida y será herramienta fundamental para la defensa del patrimonio cultural y natural.

Una ruptura con el capitalismo hasta ahora conocido que suponga relaciones menos hostiles hacia la naturaleza es indispensable. No es posible proseguir dando fuerza al modo de producción que ha depredado la humanidad. <

Esperanza Martínez es integrante de Acción Ecológica.

El movimiento indígena y el actual proceso de transición

Floresmilo Simbaña

Para muchos se ha vuelto lugar común decir que en la actualidad el movimiento indígena, y más concretamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE-, atraviesa una fuerte debilidad, que ya no tiene la capacidad de movilización como en los años 90.

Los argumentos más recurrentes para fundamentar tales aseveraciones se detienen básicamente en tres aspectos: a) el desgaste de legitimidad provocado por la participación de la CONAIE en el gobierno de Lucio Gutiérrez, b) la debilidad e incoherencia de los dirigentes, y, c) lo que algunos califican de inclinaciones "etnocentristas" de la propuesta de plurinacionalidad.

Si bien lo anotado tiene algún asidero en la realidad, son argumentos y líneas de análisis absolutamente insuficientes para entender las actuales condiciones del movimiento indígena, sobre todo si éstos son vistos por fuera del contexto general del proceso.

Sin lugar a dudas, la actual CONAIE no es la misma de los años 90, pero también es distinta la presente realidad nacional e internacional. Cuando nace en 1986, como representante nacional de las doce nacionalidades indígenas existentes en el país¹, lo hace asumiendo la herencia sociopolítica y orgánico-estructural de las luchas del mundo rural que enfrentó las dos "reformas agrarias" de 1964 y 1973. A partir del primer levantamiento indígena de 1990 asume la lucha antineoliberal en el marco general del campo popular.

Hasta mediados de los años 90, la CONAIE despliega sus fuerzas para resolver los conflictos de tierras y territorios que venían desde los años 60; todos o casi todos entrabados en largos, costosos y conflictivos procesos sociales y

judiciales. En medio de un proceso extendido y sostenido de movilización y negociación, la mayoría de estos conflictos se fueron resolviendo en diferentes dimensiones y condiciones.

Uno de los hechos que podemos ubicar como punto de viraje del proceso del movimiento indígena y de las circunstancias sociopolíticas del país en lo rural, es la puesta en vigencia, en 1994, de una nueva Ley Agraria promovida por la extrema derecha liderada por el entonces diputado Jaime Nebot, y apoyada por el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuyo objetivo capital era promover el libre mercado de las tierras, incluidas las comunitarias, y la privatización de los recursos naturales, principalmente del agua. Como respuesta inmediata, la CONAIE lanza su segundo levantamiento, con el que logra hacer retroceder dicha Ley y negociar una nueva. La Ley de Desarrollo Agrario, que finalmente entró en vigencia, cambió en buena medida la anterior; para utilizar el lenguaje del ajedrez, esta coyuntura dejó en tablas el conflicto entre el movimiento indígena y las fuerzas neoliberales del agro, junto al capital internacional.

Hasta ese momento la dinámica política del movimiento indígena por el conflicto de la tenencia de la tierra y territorios provocó el enfrentamiento directo con el capital nacional y el Estado.

La tendencia etnicista

A partir de la segunda mitad de los años 90, con una crisis económica en alza y una vez "pacificado" el campo, las comunidades indíge-

1 Las 12 nacionalidades indígenas que históricamente viven el Ecuador son: Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Secoya, Zapara, Siona, Cofan, Awá, Épera, T'záchila y Chachi.

nas y campesinas se ven urgidas de hacer producir la tierra. En estas circunstancias, el Estado (en mínima medida) y fundamentalmente la cooperación internacional (ONGs) intensifican la "inversión" en la micro y pequeña producción. Cabe mencionar la experiencia del proyecto PRODEPINE², financiado por el Banco Mundial, el FIDA y, en menor medida, el Estado, cuyo fondo para diez años ascendía a 50 millones de dólares. Pero todos esos proyectos e iniciativas entraron en crisis ya que no abordaban todo el ciclo productivo: producción-comercialización-reinversión; principalmente la comercialización, que es la parte más compleja. A esto se sumó la introducción al mercado interno de productos más baratos provenientes de Perú, Colombia y EEUU, sobre todo a partir de la dolarización.

El Estado y los gobiernos de turno no aplicaron políticas para evitar la crisis de estos sectores; al fin y al cabo al capital no le interesaban los indígenas y campesinos como productores, sino como consumidores, mano de obra barata y movable (migrantes en el interno y exterior).

Bajo esta realidad, el sector rural agrario y artesanal queda socio-políticamente enfrentado al mercado, y a través de éste a la sociedad urbana no indígena, pero no al Estado ni al capital de manera directa; de tal manera que el conflicto político-económico es visto más como un problema sociocultural, o, al menos así lo perciben varios sectores y organizaciones campesino indígenas.

Este movimiento general de la realidad y de sus condiciones económicas, políticas e ideológicas³ implicó que al interior de la CONAIE la tendencia histórica⁴ sea desplazada de la mayoría de instancias de conducción. La llegada de Antonio Vargas a la presidencia de la organización en 1996, y con él varios individuos y sectores de las organizaciones indígenas de la Costa, Amazonía y también de la Sierra, contrarias a la tendencia histórica, expresa ese viraje. Esta tendencia, que se hizo representar por Vargas, redujo el conflicto cultural a un problema étnico, dándole a éste un rol que el proyecto de plurinacionalidad nunca contempló; de hecho el proyecto político de la CONAIE de 1994 plantea que el

problema cultural es ante todo "un problema económico-político estructural, y por lo mismo un problema nacional"; es decir que el problema cultural y la reconstrucción de los pueblos indígenas se resolverán sobre una base material que cambie el sistema capitalista, por eso el proyecto político en su parte declaratoria define a la CONAIE como anticapitalista.

Esta tendencia que podemos llamar etnicista intentó, a través de sus cuadros dirigentes e intelectuales indígenas y no indígenas⁵, reformar o "actualizar" por dos veces el proyecto político, en 1999 y 2002, alejándole lo más posible de su filo radical y de izquierda. La base teórica de ese cambio fue reemplazar la categoría problema cultural por el de problema étnico, dándole a éste no sólo un valor de análisis, sino, y ante todo, categoría para la elaboración de la acción política.

La tendencia histórica, en buena medida, perdió la iniciativa política como consecuencia también de la crisis generalizada de la izquierda, pero sus críticas se ventilaban de varias maneras. Así Luis Macas, en el 2001, publica un editorial donde acusa a los dirigentes de esa época y particularmente a aquella tendencia etnicista de propiciar el neoliberalismo a través de proyectos productivistas: "este proyecto 'Prodepine', se ha ido consolidando al

2 PRODEPINE: Proyecto de desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros. Creado en 1997.

3 Recordemos que en esos años, sobre todo en la segunda mitad de los 90s, la crisis de la izquierda como corriente política, teórica e ideológica estaba en su momento de mayor profundidad tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS.

4 Esta tendencia se identifica por sus posiciones de izquierda que reafirma propuestas políticas emancipatorias, libertarias y críticas al capitalismo. Aquí no solo están los viejos dirigentes, sino también los nuevos cuadros que participan de una u otra manera.

5 En necesario mencionar que estos recibieron gran apoyo político e incluso económico de varios sectores, empezando por los gobiernos, principalmente de Buracam, Mahuad, Noboa y Gutiérrez, ya sea otorgándoles proyectos, puestos burocráticos, pero también fueron apoyados por ONGs nacionales e internacionales y medios de comunicación, quienes crearon ficticiamente los llamados "nuevos líderes".

interior de las estructuras organizativas del movimiento indígena ecuatoriano, como uno de sus peligros más amenazantes. Este proyecto replica los objetivos estratégicos del Banco Mundial, al interior de la lógica de uno de los actores más importantes del momento actual, el movimiento indígena. La dinámica que genera este proyecto se enmarca dentro de los parámetros del asistencialismo y el desarrollismo, así como de la generación de estructuras tecno-burocráticas que se consolidan como estructuras de poder al interior del movimiento indígena ecuatoriano. Reclutando técnicos que provienen del mismo movimiento indígena, y dotándoles de capacidad de gestión y negociación, este proyecto se convierte en una correa de transmisión entre el Banco Mundial y su proyecto neoliberal, y los pueblos indios del Ecuador⁶.

Pero estas nuevas condiciones históricas no sólo afectaron a la CONAIE, vemos en este mismo periodo que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas - Indígenas y Negras -FENOCIN- quedó sin capacidad de acción propia, a lo mucho realizó mínimas movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio -TLC- en medio de ferias productivas.

Rearticulación

La historia y la propia dinámica del movimiento indígena lo alejó de su lucha histórica, y es ella misma la encargada de volver a ponerlo en su verdadero cauce.

El capital internacional, para su desarrollo y sostenimiento, necesita urgentemente de la mayor cantidad de recursos naturales; para obtenerlos, no se mide en uso de ningún medio, incluso la guerra y las invasiones militares, tal es el caso de Afganistán, Irak, Somalia y la pretendida en Irán. En América Latina ha recurrido a agresivas privatizaciones de grandes extensiones territoriales en todos los países.

En Ecuador, sobre todo entre 1996 y 2004, los sucesivos gobiernos dieron en concesiones mineras, petroleras, hídricas, hidroeléctricas y de "manejo de biodiversidad" a empresas privadas y ONGs nacionales y, sobre todo, a

transnacionales, más de seis millones de hectáreas de territorios, principalmente páramos y bosques nativos. Estas concesiones fueron hechas lesionando la propiedad privada, comunal y pública y afectando directa e indirectamente a comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Sumado a esto, la pretendida firma del TLC entre Ecuador y EEUU en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios llevó al mundo rural a enfrentarse nuevamente y de manera directa con el capital (ahora abiertamente a nivel internacional) y al Estado.

La lucha contra el TLC permitió rearticular al movimiento indígena desde un enfoque más político; ello implicó el debilitamiento (no hablamos todavía de su derrota) de la tendencia etnicista y el inicio de la rearticulación de la tendencia de izquierda. Cabe anotar que este es un proceso todavía incipiente y lleno de contradicciones.

Este nuevo momento llevó a Humberto Cholango a la presidencia del ECUARUNARI y a Luis Macas a la de la CONAIE, representantes de dos generaciones de la tendencia histórica. Con estas nuevas condiciones, se enfrenta un proceso de rearticulación y reconcentración interna, que ha permitido el ingreso a la CONAIE de nuevas organizaciones indígenas y no indígenas, así como a firmar alianzas con sectores campesinos de la Costa y de la Sierra, promover fuertes espacios de debate teórico-político del proyecto y la plurinacionalidad, impulsar la creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) que agrupa a entidades de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. También se vive niveles de cambio en las bases organizativas, ahora se ha sumado comunidades y organizaciones cuya base socio-productiva es la producción-comercialización comunitaria, en algunos casos preferentemente enfocadas a la exportación. Así fue como se derrotó al TLC.

El tropiezo que significó el resultado electoral del 2006 expresa la pugna política interna de un proceso de transición y no únicamente la

6 Boletín RAYMI. Publicación del Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI. 2001.

debilidad de los dirigentes o del candidato.

No tenemos el espacio suficiente en este medio para realizar el análisis adecuado del momento actual; sólo anotaremos que esta nueva realidad marcada por el retroceso del neoliberalismo, el gobierno de Rafael Correa y el nuevo momento del movimiento indígena, nos indica que estamos viviendo un **proceso de transición histórica**, cuya orientación definitiva dependerá del movimiento general de la política internacional, cuyos principales factores determinantes son la respuesta que EEUU y Brasil puedan dar, sin descartar el papel que pueda jugar Europa e incluso China; y en medio de estas fuerzas, la política que Correa aplique como parte de la tendencia regional de gobiernos progresistas (Venezuela y Bolivia, principalmente), y de que el movimiento indígena consolide su rearticulación política y unidad con el campo popular para enfrentar este proceso de cambios.

Históricamente, se ha demostrado que todo proceso de cambios profundos, más si estamos hablando de revolución, exige, como condición indispensable, la participación de la sociedad en su conjunto, y en esa medida requiere obligatoriamente la unidad de lo rural y urbano, cuya expresión, en este proceso que el Ecuador está viviendo, significaría el acercamiento que puedan tener el movimiento indígena y el gobierno de Correa (que potencialmente es expresión de un resurgir de procesos socio-organizativos urbanos). Pero mucho dependerá de cómo enfrenten el proceso constituyente en marcha (a nivel del proceso electoral, propuestas y acciones dentro de la Asamblea Constituyente), y sobre todo, de las acciones que se emprendan para desmontar el neoliberalismo en el campo, principalmente en lo que se refiere a las concesiones de territorios a los intereses privados, porque es imposible pensar en construir un país democrático, justo y equitativo, más si decimos construir el socialismo del siglo XXI, con la mitad del territorio ecuatoriano en manos de empresas privadas y del capital internacional. <<

Floresmilo Simbaña es ex dirigente del movimiento indígena, miembro de la CONAIE-ECUARUNARI.

El 15 de enero de 2007, Rafael Correa Delgado inauguró un nuevo episodio en la democracia ecuatoriana, escenario difícil para los derechos humanos caracterizado por la fragilidad del Estado, sus instituciones y el marco jurídico; la violencia solapada e incrustada en las estructuras de la fuerza y el poder, y la marcada inequidad económica y social, histórica en el país.

Tal vez la premisa para entender este momento sea que existen dos tendencias en el Ecuador, por un lado una profunda esperanza de cambio, no solo político sino histórico, de la mayoría de la población y, por otro, una feroz resistencia y oposición a las propuestas de reforma que impulsa el Gobierno, liderada por representantes de la banca, industriales, medios de comunicación y partidos políticos tradicionales. Preocupan los desatinos del Presidente en sus declaraciones públicas y cierta imprecisión en las gestiones de la nueva administración. Con este panorama, el país camina hacia una Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Carta Magna.

Soberanía y política exterior: Sobre un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos, el Gobierno de Rafael Correa ha declarado que no se firmará si las condiciones no benefician los intereses del país. Las negociaciones realizadas por el gobierno de Lucio Gutiérrez ponían en grave riesgo el derecho a la salud, alimentación, trabajo, entre otros. Sobre la Base de Manta, el Gobierno ha decidido

Los derechos humanos en el gobierno de Correa

Paulina Ponce

no renovar el convenio por el cual se encuentran en territorio ecuatoriano militares y una base militar estadounidense.

La frontera norte es una zona marcada por la violencia: incursiones militares colombianas, impactos del Plan Colombia sobre campesinos ecuatorianos por las aspersiones aéreas con glifosato, desplazados y refugiados colombianos en territorio ecuatoriano, acceso limitado a salud y educación, y la falta de atención en servicios básicos e infraestructura configuran un panorama dificultoso para la población que vive en este territorio.

El 21 de julio de este año, se sumó a las decenas de homicidios y asesinatos registrados en la frontera norte, el asesinato de la Intendente de Sucumbíos, Irene Guerrón, quién realizaba operativos de control del contrabando de combustibles hacia Colombia. Según Amnistía Internacional, otras autoridades y funcionarios de la zona han sufrido amenazas.

Para atender esta situación, el gobierno de Rafael Correa lleva adelante el Plan Ecuador para proporcionar seguridad en las provincias fronterizas del norte a través de programas integrales y mayor presencia estatal en la zona. Según Fernando Bustamante, Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, se busca llegar a la paz a través del desarrollo y la vigencia de los derechos humanos.

La movilización social durante los primeros meses de gobierno estuvo protagonizada por las comunidades afectadas por proyectos mineros y comunidades que exigían el cumplimiento de convenios con la petrolera Petroriental en la provincia de Orellana.

Los conflictos entre la población y las transna-

cionales mineras se originaron porque en el proceso de concesión las comunidades no fueron consultadas sobre si estaban o no de acuerdo con la minería. A esto se suman atropellos a los derechos humanos como la compra ilegal de tierras, destrucción de ecosistemas, contaminación, amedrentamiento a líderes comunitarios, persecución judicial, uso de grupos armados y otros mecanismos para romper la organización y deslegitimar las luchas locales. Por su parte, el Gobierno ha incurrido en hechos de represión contra comunidades en el Azuay, donde fueron agredidas mayoritariamente mujeres campesinas.

En el caso de la población afectada por la actividad petrolera, hay inconformidad porque de las ganancias económicas que genera el petróleo, a la población llega una mínima parte, mientras que las comunidades enfrentan efectos por la contaminación y militarización de estas zonas, lo que además ha derivado en enfrentamientos entre fuerza pública y población civil.

El gobierno no ha logrado consolidar los pasos hacia la resolución de estos conflictos. El recientemente posesionado Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, mencionó que para superar estos conflictos será necesario crear condiciones de gobernabilidad. En los últimos años, los atropellos de las empresas extractivas contra campesinos han aumentado considerablemente. En estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) del año 2006, aparecen transnacionales extractivas como perpetradores de violaciones a derechos humanos; se registraron 11 denuncias, con una población directa e indirectamente afectada de 3416 personas.

La población carcelaria fue tomada en cuenta en el discurso de posesión presidencial de

Rafael Correa y la identificó en su mayoría como víctimas de la pobreza. El 23 de junio de 2007, el Gobierno declaró la emergencia carcelaria para resolver la situación de los presos sin sentencia y facilitar la repatriación de detenidos colombianos. Con esto, se pretende atender el hacinamiento y la situación jurídica de los detenidos. Las cárceles ecuatorianas tienen una capacidad para 6.500 personas, pero albergan a 16.250, de los cuales unos 2.000 son colombianos. Del total de reclusos hay 9.591 sin sentencia, según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). Hay que lamentar el asesinato de la Directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez en abril de este año, en manos de la delincuencia organizada.

Varias estructuras del Estado mantienen prácticas atentatorias a los derechos humanos, entre ellas la Policía, quienes continúan infligiendo tortura y malos tratos no solo para obtener confesiones o castigar a presuntos delincuentes, sino en detenciones arbitrarias que se han multiplicado contra jóvenes y adolescentes. Miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo juzgados por tribunales policiales o militares; en este momento se dirime la competencia en el caso de Paúl Guañuna, joven de 16 años que fue subido a un patrullero de la policía y al día siguiente apareció muerto en la quebrada de Zámbriza, en enero de 2007.

La libertad de expresión. En el contexto de la consulta popular que preguntó sobre la realización de la Asamblea Constituyente, se desató un intercambio de acusaciones entre el Primer Mandatario y los medios de comunicación. Esto derivó en que la televisión transmita videos donde aparecía el ex Ministro de economía, Ricardo Patiño en conversaciones con el Presidente del Congreso Nacional y otro con representantes de la Empresa Abadi & Co, donde hablan de una negociación de seguros para el manejo de la deuda externa de Ecuador. Por su lado el Gobierno promulgó un decreto por el cual se prohíbe la transmisión de videos gravados de forma clandestina.

Si bien el trabajo periodístico es un medio efi-

caz para controlar el ejercicio del poder y debe garantizarse, el debate sobre la libertad de expresión debería conducir al país a una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad ecuatoriana. Queda claro, después de esta coyuntura, que la información en el Ecuador es potestad de los medios por lo que cabe preguntarse cómo puede la población en general hacer uso de su libertad de expresión y si los medios de comunicación propician este derecho hacia toda la población.

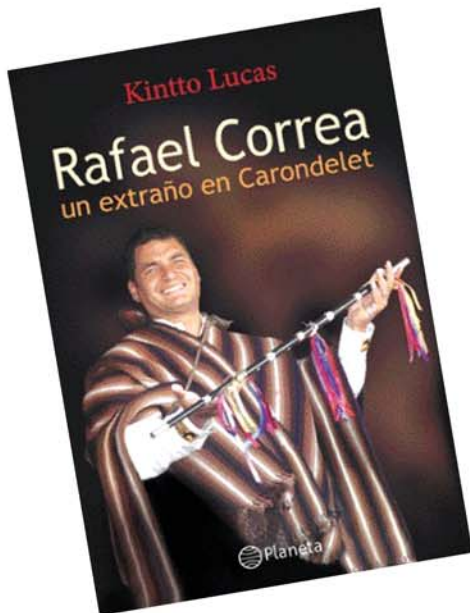
Como propuestas en derechos humanos para la Asamblea Constituyente se puede destacar:

- La adecuación de las normas internas a los tratados y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
- No establecer en el territorio nacional bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras que tengan de alguna manera propósitos militares.
- Que en general sean imprescriptibles las acciones y penas por delitos de lesa humanidad y los demás crímenes internacionales establecidos en tratados e instrumentos internacionales.
- Que en ningún caso se ordene la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad y el orden público interno.
- La prohibición del uso de fueros ya sea policial o militar para investigar y enjuiciar a los responsables de violaciones a derechos humanos como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada o la detención ilegal.

A través de decreto presidencial se conformó la Comisión de la Verdad que tiene la responsabilidad de investigar atropellos a los derechos humanos entre 1984 y 1988 donde se registraron graves violaciones contra la población ecuatoriana. Esta iniciativa y el enfoque que el Gobierno da a gran parte de sus políticas hacen prever que en este período democrático se hará una profunda reflexión sobre los derechos humanos en el Ecuador. <<

Paulina Ponce es integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

UN LIBRO POLÉMICO
Búsquelo en librerías



EDITORIAL PLANETA
Whymper N27-166 y Av. Orellana, Quito, Ecuador
Teléfono: (5932) 290-8999
Correo electrónico: planeta@access.net.ec
www.editorialplaneta.com.ec

Léxico ampliado
Quichua-Español, Español-Quichua
Tomo I
Consuelo Vincer Cossio

CHICHAM
DICCIONARIO SHUAR-CASTELLANO
Editorial Aby-Yala

Lengua y cultura quichua
Consuelo Vincer Cossio

Lo mejor en lenguas nativas
Encuéntrelo en

ABYA YALA
Quito-ECUADOR

www.abyyala.org

LIBRERÍA: Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
• Telf: (593-2) 2506247 • libreria@abyyala.org
• ventas@abyyala.org
EDITORIAL: Isabel la Católica 381 y Madrid
• Telf: (593-2) 2506251 • Fax: (593-2) 2506267
• editorial@abyyala.org

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales

en conmemoración de los 50 años de FLACSO

29 al 31 de octubre de 2007, Quito

Seminario: Movimientos sociales y ciudadanos y políticas públicas de comunicación

Organizan:



Ponentes y comentaristas:

Emir Sader - Adalid Contreras - Raúl Zibechi - Blanca Eekhout - Claudia Korol
Nilton Viana - Sally Burch - Oscar Ugarteche - Osvaldo León

Movimiento de mujeres y Asamblea Constituyente

M^a. del Pilar Troya F.

En nuestro país, las primeras manifestaciones importantes del movimiento feminista¹ datan de inicios de los 70. Antes, las mujeres fueron parte de luchas campesinas, de trabajadores, de estudiantes, pero tuvieron pocas reivindicaciones propias, entre las que se podría mencionar el derecho al voto, el acceso a cargos de elección popular y a la educación superior. También existieron otro tipo de expresiones de la lucha de las mujeres plasmadas, por ejemplo, en asociaciones y publicaciones femeninas que iniciaron tan temprano como a comienzos de siglo pasado, así como algunas organizaciones de mujeres que actuaron desde la década de los 60.

La crisis económica de los 80, que impulsa a más mujeres a asumir trabajos fuera del hogar, los mayores niveles educativos alcanzados por ellas, la democratización formal del sistema político tras el fin de la última etapa de dictaduras y, en ese marco, la incipiente incorporación de mujeres a la vida política tanto en el ámbito de la representación pública estatal (diputadas, ministras, concejales) como en el de los movimientos sociales, promueven una verdadera explosión de expresiones del movimiento de mujeres. Este proceso se consolida en la década de los 90, cuando son ya visibles una multitud de organizaciones de mujeres: grupos informales de base, grupos de autoayuda; ONG del tipo centros de mujeres con enfoque de género, feministas o talleres de producción; organizaciones gubernamentales; entes religiosos con programas de apoyo a la mujer; organizaciones sociales, políticas, gremiales, grupos de mujeres dentro de partidos y movimientos políticos.

Existen también, desde la década de los 90, organizaciones nacionales de mujeres de mayor envergadura, tales como la

Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas que vincula a organizaciones de base, además de tener una estructura de representación propia, el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana que agrupa a varias ONGs y organizaciones de base, las Feministas por la Autonomía que agrupa más bien a mujeres a nivel individual, organizaciones lideradas (y compuestas en su mayoría también) por mujeres de clase media profesionales e intelectuales. Data también de esta época, el Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares (MNMSPP) que aglutinaba a organizaciones de base urbanas y rurales. En este siglo aparecen, asimismo, con carácter más o menos nacional, la Confederación de Mujeres por el Cambio, Luna Creciente (formada a raíz de la división del MNMSPP) y con una difusión algo menor, el Movimiento Mujeres por la Vida. Existen, además, expresiones locales importantes del movimiento de mujeres sobre todo en Quito, Guayaquil, El Oro y Loja. En lo que tiene que ver con la vertiente étnica existen la Coordinadora de Mujeres Afroecuatorianas como la principal entre varias organizaciones y la Confederación de Mujeres Indígenas del Ecuador (CONMIE), filial de la CONAIE².

- 1 En el sentido de perseguir reivindicaciones enmarcadas en el feminismo entendido como movimiento social que apunta hacia un cambio radical en las estructuras de poder de las sociedades, de modo de terminar con la subordinación de las mujeres. En ello se distinguen de otro tipo de organizaciones de mujeres, como pueden ser las pobladoras urbanas pobres en lucha por servicios básicos o las Madres de Plaza de Mayo (Argentina) en cuyo caso el énfasis no está en las cuestiones de género sino en los derechos sociales de sus familias, en el un caso, y el combate a la impunidad, en el otro.
- 2 No pretendo ser exhaustiva, sino solamente nombrar las principales vertientes y organizaciones.

Las organizaciones que conforman el movimiento de mujeres en el Ecuador en ocasiones se articulan y actúan más o menos conjuntamente, pero en general funcionan como puntos nodales de una red. No existe una sola gran coordinación o voz autorizada del movimiento, sino diferentes instancias que adquieren protagonismo según las circunstancias, los tópicos o las coyunturas. La participación se da en forma diferencial en diversas temáticas. Por supuesto, también ocurre cierta superposición de ámbitos de acción, disputas por espacios y recursos, así como divergencias acerca de los temas y su tratamiento.

De entre los importantes logros del movimiento de mujeres y feminista ecuatoriano, quisiera destacar en torno al tema de este artículo, la cuota fijada en la Ley de Elecciones, que estableció un mínimo de 30% de mujeres en las listas, a incrementarse en cada nueva elección hasta llegar a la paridad (50%), la que ha sido alcanzada en las presentes elecciones. Se trata de un hecho histórico, que no se da en otros países de la región, que también tienen cuotas, pero fijas entre 20 y 30%. Es relevante, asimismo, en el proceso actual, el hecho de que por primera vez el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha obligado, impulsado por la incansable presión del movimiento de mujeres, a los movimientos y partidos, a respetar lo que la ley indica, esto es, además de la cuota, la alternancia y secuencia (mujer-hombre, hombre-mujer) en las listas, hecho que no se había dado en las anteriores elecciones. Este marco jurídico, que garantiza el derecho a la participación de las mujeres, es un instrumento fundamental para el logro de la igualdad sustantiva y una contribución decisiva de las mujeres a la democratización de la representación política.

28

El movimiento de mujeres mantiene, en los últimos años, vínculos generalmente débiles e inestables con otros movimientos sociales. La necesidad de evitar que las demandas de las mujeres se diluyan en el marco de otras más generales -como tiende a pasar muchas veces con el movimiento de mujeres indígenas, por ejemplo- ha conducido a un cierto aislamiento. Además, la falta de voluntad de la mayoría de movimientos sociales, que conservan

fuertes rezagos patriarcales, parte de la matriz de cultura política autoritaria predominante en el país, para asumir la agenda de las mujeres, junto con la poca fuerza del movimiento de mujeres, incide en ello. Sin embargo, varias mujeres, que se auto reconocen como parte del movimiento de mujeres, son parte de las listas actuales a assembleístas, tanto a nivel nacional cuanto en varias provincias, sobre todo en movimientos de izquierda.

Propuestas constitucionales

Los avances logrados en la anterior asamblea constituyente fueron importantes: de 36 propuestas presentadas se logró la inclusión de 34, entre ellas, cabe destacar, por su carácter de avanzada, la garantía del derecho a la libre opción sexual y el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo. Las conquistas vinculadas con la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos son las que potencialmente podrían estar ahora en peligro por el avance de corrientes fundamentalistas que desconocen y violan derechos, incluso aquellos reconocidos en instrumentos internacionales. Corrientes muchas veces con fachadas laicas de ONGs y asociaciones, pero con estrechos vínculos con determinadas iglesias.

Con miras a preparar la participación en la Asamblea Constituyente, se realizó el 7 y 8 de junio pasado la Preconstituyente desde las Mujeres, como evento de organización del movimiento. En este encuentro, se ratificó la voluntad de impulsar el principio de progresividad de los derechos humanos, esto es, no permitir el retroceso de las conquistas logradas.

Otros puntos fundamentales a impulsar en la Constituyente, desde la perspectiva de fortalecer la garantía de los derechos de las mujeres e impulsar una verdadera igualdad de género, son: la necesidad de reforzar el carácter laico del Estado y de la educación pública; ahondar la salvaguarda de los derechos sexuales y los derechos reproductivos; garantizar la participación paritaria en las instancias de gobierno; sostener las disposiciones que permiten las acciones afirmativas

tales como la cuota, así como aquellas que procuran evitar y refuerzan las sanciones contra toda forma (económica, política, social, cultural) de discriminación y violencia debida a género; y promover la corresponsabilidad de la vida familiar entre mujeres y hombres. Además, dotar al Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) de rango ministerial, y definirlo como el ente rector superior de las políticas de equidad de género. Añadir disposiciones respecto a que, para ser funcionaria/o público u ocupar cargos de elección popular, no se deberá estar sancionado por delitos sexuales, corrupción, narcotráfico, ni ser deudor de pensiones de alimentos.

Hay acuerdos generales entre las organizaciones del movimiento presentes en la pre-Constituyente sobre varios puntos reiteradamente mencionados y debatidos. A continuación señalo solo los más importantes porque enumerarlos todos sería muy largo. *Recuperar el rol regulador del Estado y articularlo con la actividad privada y comunitaria. Que los Bienes públicos y sectores estratégicos no pueden ser manejados por empresas privadas, especialmente el agua. La planificación económica y social, se hará de*

manera participativa, integral, equitativa y descentralizada en todos los niveles. Mejorar y ampliar la participación ciudadana y de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer del Estado y del gobierno. Que los organismos de control y la Corte Suprema de Justicia sean conformados en base a concursos de méritos, despartidizándolos y promoviendo además la paridad en ellos. La necesidad de políticas internacionales soberanas y democráticas: no involucramiento en el Plan Colombia ni Base de Manta. Apoyo a procesos de descentralización que promuevan la equidad entre los territorios sin atentar contra la vigencia del Ecuador como Estado: no habrá transferencia de competencias en los recursos energéticos o naturales. Revocatoria del mandato; rendición de cuentas periódica de las y los funcionarios públicos. Garantía de derechos económicos, sociales y culturales para todas y todos, especialmente educación y salud universales y gratuitas. <<

M^a. del Pilar Troya F. es antropóloga de la PUCE, Master en Género y Desarrollo por FLACSO Sede Ecuador. Integrante de la Asamblea de Mujeres de Quito



JUVENTUD OBRERA CRISTIANA DE AMÉRICA
 JUVENTUDE OPERARIA CRISTA DE AMERICA
 JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE

Encuentro de Formación Continental de Jóvenes Trabajadores/as

Los y las jóvenes en América están sumergidos en diferentes situaciones. Algunas que les dan ánimo y fuerzas para seguir su camino, construir su futuro tanto al nivel colectivo como personal. Otras situaciones les conducen a la marginalización total, al descrédito, a la desesperanza y consecuentemente a la pérdida del sentido de la vida.

La JOC (Juventud Obrera Cristiana), como organización internacional, realiza actividades nacionales e internacionales de intercambio de experiencias de vida y de acción que motiven a los jóvenes a caminar, a construir el futuro y a luchar por sus derechos. **En este año realizaremos, del 15 de octubre al 7 de noviembre, en Haití,** un seminario de formación, capacitación y revisión del compromiso y un intercambio entre jóvenes de diferentes países de América y jóvenes de Haití.

En Haití un número significativo de personas no tiene trabajo -o está en el sector informal-, ni acceso a la salud. Esta situación afecta, en especial, a la juventud haitiana. Para hacer frente a estas situaciones, la JOC de Haití desarrolla acciones en centros de capacitación, organización de jóvenes trabajadores del sector informal y acciones en el mundo de la economía solidaria. Sobre estos procesos queremos intercambiar entre los/las jóvenes trabajadores de América.

Para saber más sobre esta actividad y sobre las acciones del movimiento JOC en América, entre en nuestra página WEB recién lanzada: www.jocamerica.info. Es una página en construcción y tú también podrás opinar. **Desde ya les damos la bienvenida.**

Revolución ciudadana: Con los medios en contra

Eduardo Tamayo G.

Los medios privados del Ecuador, al igual que en Venezuela y Bolivia, están desempeñando un rol de actores políticos de oposición, pese a que repetidamente lo desmienten.

La experiencia venezolana, donde los medios privados reemplazaron a los desprestigiados partidos políticos de oposición, e incluso se involucraron en el golpe de Estado de abril de 2002 para derrocar al presidente electo democráticamente, Hugo Chávez Frías, no ha pasado desapercibida para sus similares del Ecuador. Y para tratar de establecer una estrategia frente al gobierno de Rafael Correa buscan consejeros del exterior a quienes entrevistan profusamente.

Así por ejemplo, Ricardo Trotti, director de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), les aconsejaba: *"Mi punto de vista es que los medios no podemos caer en el juego, en la diatriba, el antagonismo y terminar haciendo lo que nos acusan, oposición. Eso les encanta a ellos y por eso nos provocan"*. (El Universo, 3-06-2007)

Pero los directivos de los medios no le están haciendo caso a Trotti. Juran y rejurán que no caerán en la tentación de reemplazar a los partidos políticos y que su papel no es intervenir en la lid política sino de *"informar con rigor y objetividad y aplaudir cuando haga falta"*; pero los métodos que utilizan y las agendas que tratan de imponer al país los delatan y hacen todo lo contrario de lo que predicán.

En una extensa carta al diario El Universo (uno de los de mayor tiraje que se edita en

Guayaquil) el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, le recordaba que *"Nadie habla desde la imparcialidad"* y que el periódico tenía todo el derecho de ser *"un espacio militante de crítica y oposición al proyecto político del gobierno de Rafael Correa"* pero que tenía *"la obligación moral de comunicárselo a sus lectores"*. Además, agregaba que lo que *"resulta carente de ética es que, habiendo definido una línea de oposición, se pretenda mantener la neutralidad desde el discurso"* (El Universo, 29-07-I 2007)

Que se calle

A los medios no les gusta el discurso confrontacional de Correa. El Presidente, ciertamente, ha cuestionado duramente a los grandes medios como también a los banqueros y a las elites -a las que llama los pelucones- que han dominado el país durante toda la vida republicana. El discurso confrontacional está en concordancia con los objetivos del proyecto político de "la revolución ciudadana" y posibilita que el mensaje quede grabado en la mente de la gente. Correa, frecuentemente denuncia no solo que hay mafias en los medios sino que estos son incompetentes, mediocres, racistas y corruptos. Los medios no están acostumbrados a ser cuestionados: son el poder que está por encima del bien y del mal, que goza de impunidad, cualquier crítica es interpretada como "atentado a la libertad de expresión".

Por ello, los editorialistas como los políticos de oposición, en numerosas ocasiones, han pedido a Correa que se calle, que guarde silencio, que no confronte, que sea tolerante e incluyente con las clases adineradas que "también forman parte del país".

Tampoco están de acuerdo que se deleve la "relación incestuosa" entre el poder económico financiero y el poder mediático. Correa, en varias ocasiones, ha señalado que los principales canales de televisión están en manos de los banqueros. Y ha citado casos concretos: Fidel Egas, además de ser el mayor accionista del Banco del Pichincha, uno de los más grandes y fuertes del país, es accionista mayoritario del Canal 4 (Teleamazonas) con alcance nacional, además de que su grupo es propietario de las revistas *Gestión* y *Diners*. El grupo Isaías es propietario de los canales Telecentro, Gamavisión y Cablevisión y de las radios Universal, radio K 800 y Radio Carrousel. El grupo económico El Juri, uno de las más fuertes del país, es dueño del canal Telerama, también de alcance nacional. Sobre estas denuncias, los medios, por supuesto, no profundizan ni les dan seguimiento, pero gastan mucha tinta, papel y espacio para informar y comentar sobre ciertos hechos y expresiones equivocadas del presidente Correa como las de parafrasear a Tony Blair, quien calificó a los medios de "bestias salvajes", o referirse a una periodista como "gordita horrorosa". Cabe indicar que este claro cuestionamiento de Correa al poder mediático se vio desdibujado cuando eligió como blanco a algunos periodistas de los medios y no a sus patronos, provocando el rechazo de los gremios periodísticos, que, en ciertos casos, se alinearon con los empresarios de la información.

Esta relación entre banca y medios se puso en evidencia cuando el presidente Correa envió un proyecto de ley al Congreso para regular las altísimas tasas de interés que cobran los bancos y que les han permitido acumular pingües ganancias. En esta oportunidad, los bancos, coaligados con los medios, emprendieron una millonaria y agresiva campaña para oponerse al proyecto, consiguiendo finalmente que los diputados desechen la propuesta de Correa y aprueben una ley que favorece a los bancos. Así quedó evidenciado que en los medios hay un conflicto de intereses, y que, en esa medida tienen una imposibilidad estructural para cumplir su función social en democracia, pues la información y la opinión

que emiten es su propia información y opinión, reñida con el interés general.

Preservar el monopolio

Otro temor de los grandes medios es perder el monopolio del manejo informativo pues el gobierno ha anunciado la necesidad de contar con sus propios medios. Por lo pronto, el gobierno de Correa tiene, como mecanismo de información, una cadena radial que se transmite los días sábados. Además, cuenta con sitio Web (www.presidencia.gov.ec), proyecta reanudar las transmisiones de la Radio Nacional del Ecuador e instalar un canal estatal, que ha encontrado dificultades pues el Estado, a pesar de que es dueño de las frecuencias radioeléctricas, no cuenta con una (en VHF) para poder salir al aire. Asimismo, el gobierno ha recuperado, de las manos de los grupos económicos de Guayaquil, el periódico *El Telégrafo*, que perteneció a los banqueros, convirtiéndolo en un medio estatal.

Los medios han puesto el grito en el cielo ante el anuncio gubernamental de que se controlará la programación que frecuentemente incita a la violencia y al racismo, y para velar por su calidad artística, cultural y moral, como dispone la Ley de Radiodifusión y Televisión reformada de 1995 que nunca ha sido aplicada. Es que, para los medios dominantes, solo existe un modelo posible de comunicación: el modelo corporativo que proviene de la matriz estadounidense, "motivado por las ganancias y sostenido por las ventas de publicidad". En este esquema todo vale. Ciertos medios no dudan en utilizar las tres "eses" (sensacionalismo, sexo y sangre) para lograr mayor tiraje o rating, y no les importa apelar a los instintos más primarios del ser humano para conseguir sus objetivos mercantilistas. En este modelo, los medios no admiten ningún tipo de control ni estatal ni ciudadano.

Se deslegitiman

Los grandes medios actúan con espíritu de cuerpo y se muestran contrarios al proyecto de socialismo del siglo XXI anunciado por Correa. Pese a que el programa de Correa se

corresponde a una tendencia de centro-izquierda que busca rescatar la soberanía e impulsar políticas sociales redistributivas en el marco del capitalismo, los medios, coaligados con la derecha, no le han dado tregua a Correa y lo han atacado en forma sistemática y despiadada para intentar echar abajo su proyecto, utilizando todas las armas.

Sin embargo, la ofensiva mediática parece no estarles dando los resultados que esperan sus mentalizadores. Vale recordar que durante la consulta popular para la Asamblea Constituyente realizada el 15 de abril del 2007 la mayoría de medios se opuso a ella. Los titulares así como el grueso de los editorialistas decían que se trataba de una novela, que el pueblo está desinformado, que no sabe ni entiende de lo que se trata. Sin embargo, el pueblo se pronunció en un 82 por ciento a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, comprobándose que los medios no solo que han perdido influencia sino que han dejado de sintonizar con las corrientes ciudadanas que exigen cambios.

Los medios conservan su poder. No han sido afectados. Pero el resultado no esperado del enfrentamiento con Correa es que están perdiendo credibilidad y que en sectores ciudadanos no solo se escuchan voces que llaman a dejar de comprar los periódicos o a apagar la televisión, sino que haya una búsqueda urgente de otras formas de comunicación, como ya sucedió durante el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en abril del 2004.

Un asunto ciudadano

En este contexto, uno de los puntos débiles del Gobierno de Rafael Correa es el de la comunicación no solo para hacer frente a las elites que pretenden conservar el statu quo sino para viabilizar su propio proyecto. Durante la campaña electoral y en los meses

que lleva de gestión, el régimen ha puesto énfasis en la propaganda que ciertamente ha sido creativa y exitosa pero ha descuidado dotarse de una estrategia de comunicación e impulsar políticas públicas en este terreno.

Las políticas públicas de comunicación implicarían revisar el reparto de frecuencias radioeléctricas, que han sido adjudicadas como botín político, y proceder a su democratización; fortalecer los medios alternativos y comunitarios; incentivar la diversidad lingüística y cultural; promover y fortalecer el control ciudadano sobre la programación de los medios corporativos.

Una estrategia de comunicación, entre otros puntos, implica abrir un debate sobre el tema, una apropiación y una decisiva participación de todos los estamentos sociales, para que la comunicación deje de ser un asunto que solo involucra a los medios, los periodistas o los funcionarios.

Existe un clamor en varios sectores para que en la nueva Constitución, se establezca una clara separación entre los grupos de poder económico y los medios, evitando la concentración de los bienes comunicacionales y simbólicos en pocas manos. Esta sería la mejor vía para afectar al poder mediático corporativo. Así mismo, será vital consagrar "La comunicación como un derecho humano fundamental inherente a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el territorio nacional, y que sirva de base para el ejercicio de todos los demás derechos (humanos, sociales, culturales, políticos y económicos)", como señala una propuesta de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito. <

Eduardo Tamayo G. es periodista e investigador ecuatoriano.



AMERICA LATINA en movimiento

revista mensual

ACTUALIDAD Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

- Realidad Regional
- Procesos Sociales
- Problemáticas Contemporáneas

Un esfuerzo conjunto de analistas y pensadores destacados, organizaciones sociales y ciudadanas, escritores y comunicadores comprometidos con las causas sociales.

Fuente de información imprescindible para líderes de opinión, dirigentes sociales, activistas políticos, centros de estudios y formación, periodistas y medios de comunicación, organismos de desarrollo...

¡SUSCRIBETE!

Una prensa independiente depende de los aportes de sus lectores

info@alainet.org • www.alainet.org/revista.phtml

ALAI • casilla 17-12-877, Quito, Ecuador • email: info@alainet.org • www.alainet.org